



UNIVERSIDAD DE CUENCA
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales
Maestría en Género y Desarrollo

El femicidio Cantón Cuenca: Análisis de la aplicación del tipo penal femicidio por los/as operadores/as de justicia en los procesos legales, periodos 2014-2016.

Trabajo de Titulación previo a la
obtención del título de Magíster en
Género y Desarrollo

Autora:

Ab. Silvia Catalina Domínguez Calderón.
C.I. 0104769898
ab.silviadominguez@hotmail.com

Directora:

Mgt. Patricia Verónica Calero Terán
C.I. 1709150732

Cuenca- Ecuador
10/12/2019



Resumen

El presente trabajo de investigación analizó la aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia del cantón Cuenca, provincia del Azuay, en los periodos 2014-2016. La investigación tiene como eje principal identificar los tres componentes del derecho: componente formal normativo, componente estructural y componente político-cultural, metodología propuesta por Facio (2004).

En la investigación se recopiló conceptos que fundamentan la necesidad de la tipificación del femicidio. Se expone también instrumentos internacionales que son la base del marco jurídico y dieron lugar a la tipificación del femicidio. Los discursos del debate legislativo, la reacción social, las organizaciones no gubernamentales explicaron el por qué abordar, prevenir y erradicar la violencia más extrema cometida contra la mujer. La investigación muestra cómo el sistema judicial invisibiliza los derechos de las mujeres, como resultado los operadores de justicia desconocen las formas específicas de violencia ejercidas en contra de la mujer. Una estructura institucional insensible que minimiza el tratamiento de la violencia. Lo que da como resultado un sistema judicial inactivo que transfiere la responsabilidad de la prueba a los familiares de las víctimas y a las víctimas sobrevivientes, sin dimensionar gravedad del problema.

Palabras Claves: Femicidio. Violencia. Derechos humanos.



Abstract

This research work analyzed the application of the femicide criminal type by the justice operators of the Canton Cuenca Province of Azuay, in the periods 2014-2016. The main research is to identify the three components of law, formal regulatory component, structural component and political-cultural component, methodology proposed by Alda Facio (2009).

The research compiled concepts that support the need for the typification of femicide. International instruments that are the basis of the legal framework and gave rise to the definition of femicide are also presented. The speeches of the legislative debate, the social reaction, the non-governmental organizations explained why to address, prevent and eradicate the most extreme violence committed against women. The investigation shows how the judicial system makes women's rights invisible, as a result the justice operators are unaware of the specific forms of violence against women. An insensitive institutional structure that minimizes the treatment of violence. This results in an inactive judicial system that transfers responsibility for the evidence to the next of kin of the victims and to the surviving victims without assessing the seriousness of the problem.

Key words: Femicide. Violence. Human rights.



Índice de contenidos

Resumen	2
Abstract.....	3
Índice de contenidos	4
Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional	5
Cláusula de Propiedad Intelectual	¡Error! Marcador no definido.
Dedicatoria.....	6
Agradecimientos	9
Introducción.....	10
Capítulo 1	13
1.1. Marco Constitucional e Instrumentos Internacionales y Nacionales respecto de la Violencia contra la Mujer en el Ecuador	13
1.2. Marco teórico.....	24
1.3. Tipos de violencia.....	27
1.4. Círculo de la violencia	32
1.5. Causas de la violencia intrafamiliar.....	36
Capítulo 2	39
2.1. El femicidio, su antecedente	39
2.2. El femicidio y el feminicidio	41
2.2.1. Diferencias entre el femicidio y feminicidio	45
2.3. Diferencias entre femicidio y asesinato	47
2.4. El femicidio y la legislación ecuatoriana.....	50
Capítulo 3	54
3.1. Trabajo de investigación en campo, su metodología.....	54
3.2. Casos de femicidio en el cantón Cuenca, periodo 2014-2016.....	58
3.3. Análisis jurídico de procesos judicializados de femicidio, periodo 2014-2016	68
3.4. Resultado de las entrevistas a jueces y fiscales de la Función Judicial	73
3.5. Análisis de los resultados finales de la investigación.....	76
3.6. Impacto social y jurídico	79
Capítulo 4	82
4.1. Conclusiones.....	82
4.2. Recomendaciones	83
Referencias	85
Anexos	89



Anexo 1: Consentimiento informado de cada uno de los participantes	89
Anexo 2: Guía de preguntas para operadores de justicia.....	91

Índice de tablas

Tabla 1. Metodología aplicada en la investigación	57
Tabla 2. Etapas procesales.....	72

Índice de gráficos

Gráfico 1. Círculo de la violencia.....	35
Gráfico 2. Femicidio y feminicidio	46



Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio
Institucional

Silvia Catalina Domínguez Calderón, en calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Consecuencias de la ausencia de reconocimiento legal de la violencia económica y/o patrimonial en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres” de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 9 de diciembre de 2019.



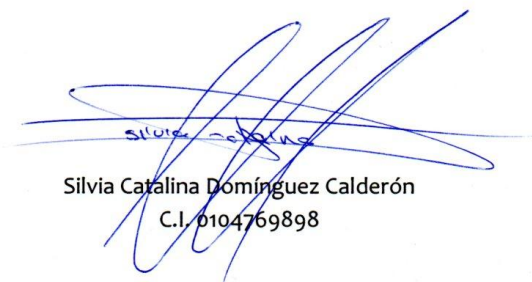
Silvia Catalina Domínguez Calderón
C.I. 0104769898



Cláusula de Propiedad Intelectual

Silvia Catalina Domínguez Calderón, autora del trabajo de titulación “El femicidio Cantón Cuenca: Análisis de la aplicación del tipo penal femicidio por los/as operadores/as de justicia en los procesos legales. Periodos 2014-2016.”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 9 de diciembre de 2019.



Silvia Catalina Domínguez Calderón
C.I. 0104769898



Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios que ha sido mi guía, mi fortaleza, en cada paso que he dado en el desarrollo de la investigación, lo que me permite seguir creciendo.

A mi compañero de vida Santiago Uday, quien desde el inicio siempre me ha acompañado de la mano a caminar por esta etapa tan importante en mi vida, no existen palabras que demuestren el amor incondicional que siento por estar siempre a mi lado.

A mis hijos Emilia y Santiago, quienes tuvieron que lidiar con mis ausencias por motivos de estudios, sus palabras de amor, acompañados de sus sonrisas me llenaron de fuerzas y optimismo, para no declinar y seguir adelante.

A toda mi familia, por sus palabras de aliento y buenos deseos en este proyecto.

Silvia



Agradecimiento

A la Universidad de Cuenca, por brindarme la oportunidad de formarme en una área tan importante para la sociedad “Genero y desarrollo”. Maestría que estuve esperando con tantas ansias.

A mi Directora de tesis, Magíster Patricia Calero, quien tuvo que lidiar con mis ideas que se plasmaban de manera desordenada, con su paciencia me enseñó que nada en la vida es imposible cuando estamos convencidas de lo que hacemos y pensamos.

A mi tutora de proyecto Magíster María José Machado, quien desde el inicio de mis estudios me apoyó a plasmar mis ideas, orientándome a buscar estrategias que reflejen mi proyecto de tesis con enfoque de género.

Finalmente, agradezco a todas las personas que de una u otra manera aportaron para el desarrollo de mi trabajo de tesis.

Silvia

Introducción

Desde décadas pasadas las mujeres han luchado por alcanzar el reconocimiento de sus derechos fundamentales que han sido invisibles para el sistema, pretendiendo mover las estructuras en las que se asientan los “privilegiados” del hombre.

Ecuador no fue la excepción, alzó la voz de aquellas voces silenciadas que han vivido en la impotencia y la violación de sus derechos. La presente investigación busca identificar si al tipificarse el tipo penal femicidio en el Estado ecuatoriano, los operadores de justicia del cantón Cuenca, provincia del Azuay, aplican el tipo penal que reconoce la expresión máxima de violencia contra las mujeres por razones de género.

La violencia de género es un fenómeno que afecta a todas las mujeres del mundo sin distinción alguna. De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Ministerio del Interior en el Ecuador, en el año 2014 se produjeron 1303 muertes violentas, de las cuales 179 son muertes cometidas en contra de mujeres, 97 casos son femicidios, cifras que pertenecen a las ciudades de Guayaquil y Quito, en la ciudad de Cuenca, de acuerdo a la Complejo de la Judicatura en los periodos 2014-2016, se cometieron 2 casos de femicidio; actos de violencia inhumanos que demuestran la realidad cruel que las mujeres deben afrontar en la sociedad.

Como es de conocimiento general, la violencia contra la mujer es un problema que afecta a la sociedad en gran dimensión y en todas las esferas, siendo sus víctimas directas mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres embarazadas, sin distinción de edad y condición.

Reconocer los derechos humanos de las mujeres no es un beneficio exclusivo de la mujer, es un avance positivo de toda la humanidad; a través del reconocimiento de los

derechos humanos consagrados en los tratados internacionales se garantiza la no vulneración de los derechos con un enfoque de género y no discriminación que erradique las diversas formas de violencia.

De esta manera, la investigación busca establecer los avances y límites en la aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia, determinando los factores que impiden un acceso efectivo a la justicia, la investigación, sanción y reparación idóneas y el cese de la impunidad.

Debiendo el Estado reconocer el femicidio como una problemática no aislada en relación con las demás formas de violencia ejercidas en contra de las mujeres, es su deber garantizar el no cometimiento de este delito, a través de mecanismos de prevención, sanción y erradicación, cuestionando de manera clara la estructura de poder impuesta por la sociedad.

El estudio utilizó un método cualitativo, el interés fue conocer las experiencias de los operadores de justicia en la aplicación del tipo penal “Femicidio”, la existencia o no de factores que impidan su debida aplicación. Para la obtención de la información se utilizaron entrevistas semi-estructuradas que se aplicaron a los operadores de justicia del cantón Cuenca, a fin de identificar si los derechos humanos de las mujeres se encuentran verdaderamente protegidos por el Estado.

Las entrevistas contaron con una guía de preguntas con el fin de mantener el hilo conductor del tema, sin embargo, al tratarse de entrevistas semi-estructuradas se realizaron preguntas espontáneas para profundizar en la información obtenida. Previo a las entrevistas se contó con autorización para la grabación de la conversación, es decir, se obtuvo el

consentimiento informado. Por cuestiones éticas los nombres de las personas que participaron en la investigación son confidenciales.

Se realizó un análisis de dos cuerpos procesales de muertes violentas de mujeres en el cantón Cuenca entre los periodos 2014-2016, previo a la selección de los casos se buscó información en la Función Judicial y la Fiscalía de Cuenca, los casos seleccionados tenían como característica ejercicio de poder, humillación, misoginia sobre las víctimas.

El estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera: el capítulo uno abarca la trascendencia de los Derechos Humanos de las mujeres, concepto que ha sido instituido con mirada limitada tradicional que ha invisibilizando a la mujer, negándole su participación en los diversos espacios sociales, culturales, laborales y políticos, visualizando su reconocimiento en la normativa internacional y nacional.

En el capítulo dos se hace un análisis del femicidio, su connotación en el Estado ecuatoriano, la diferencia del femicidio y el feminicidio para los diversos Estados, a la par se realiza un análisis de las diferencias que existen en relación al femicidio y al asesinato, en correlación con él.

En el capítulo tres se realiza un análisis jurídico, con enfoque de género, que buscó identificar la existencia de nudos críticos al momento de aplicar el tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia; por lo tanto, se realizó entrevistas semi-estructuradas y análisis de dos piezas procesales del tipo penal de estudio.

En el capítulo cuarto se realizó conclusiones y recomendaciones en base al objetivo general y específicos, lo que permite dar continuidad al hilo conductor del trabajo investigativo, “identificar los avances y límites en la aplicación del tipo penal femicidio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay”.

Capítulo I

1.1. Marco Constitucional e Instrumentos Internacionales y Nacionales respecto de la Violencia contra la Mujer en el Ecuador

Reconocer que la violencia contra la mujer es un problema primordial de Estado permite entender que la mujer se encuentra en situación de riesgo, humillación y tortura, lo que impide la autonomía, la libertad de la mujer en la sociedad y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. En este sentido, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y el aseguramiento del acceso a la justicia, son sustanciales para asegurar la igualdad plena de la mujer.

En 1948 la **“Declaración Universal de Derechos Humanos”** en sus consideraciones reconoce la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En su Artículo 1 establece el principio de igualdad al declarar que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; y, en su Artículo 2 establece el principio de no discriminación al señalar que “todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición social, económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). Es decir, tanto hombres como mujeres deben gozar de sus derechos en igualdad de condiciones, lo que se traduce en no ser discriminado por ninguna condición.

En 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la **“Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”**, que en su preámbulo establece:

La discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana y con el bienestar de la familia y de la sociedad, impide su participación en la vida política,

social, económica y cultural de sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a la humanidad (Naciones Unidas, 1967, pág. 5).

Esta Declaración reconoce que “la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana” (Artículo 1), y establece el compromiso tanto de las Naciones Unidas como de los Estados que son parte de ésta de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, todos sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 adoptó “**La Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW**” que entró en vigencia el 3 de septiembre del año 1981, y que fuera ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1981. La Convención tiene como básica jurídica la prohibición a todas las formas de discriminación contra la mujer. Su artículo 1 estipula que se debe entender por discriminación contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause daño o sufrimiento a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. En su Artículo 2, la Convención establece que “los Estados Partes condenan la discriminación contra de la mujer”, e instan a generar políticas públicas que se encaminen a erradicar la discriminación; por lo tanto, se comprometen a:

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer, y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
- e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera persona, organizaciones o empresas (CEDAW, 1979).

La Convención establece que los Estados Partes tienen la obligación legal de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, en los ámbitos públicos y privados, para obtener el desarrollo íntegro de las mujeres, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales en plano de igualdad con los hombres (Artículo 3), para el efecto, los Estados Partes deben implementar acciones, estrategias legales, sociales, culturales y políticas que garanticen la erradicación de la discriminación contra la mujer.

La Convención, con el fin de observar el cumplimiento de los Estados Partes, conforma el **Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer** (Artículo 17), que tiene, entre otras, la atribución de hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general (Artículo 21; 1) sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella prevista. Como parte de esta atribución, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación General No. 19 sobre “La Violencia contra la Mujer”, señala que “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de

gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (pág. 1). Esta observación, al referirse a la definición de discriminación establecida en la CEDAW, señala en el párrafo 6:

En la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione expresamente a la violencia o no (CEDAW, 1992, pág. 6).

Hablar de violencia contra la mujer es reconocer que el sistema estructural ha impuesto roles de inferioridad a la mujer, lo que ha dado como resultado la discriminación y la violación de sus derechos fundamentales. Frente a esta realidad contra la mujer, los Estados Partes deben de proteger y garantizar una vida digna sin discriminación a través de normas, políticas públicas con enfoque de género que permitan alcanzar la igualdad entre mujer y hombre. Se debe reconocer que la violencia contra la mujer se manifiesta en el ámbito público como privado; las diversas formas de violencia van desde el abuso físico, psicológico, y/o sexual, en ocasiones todas estas formas de violencia se presentan sobre una misma mujer.

En 1993, “**La Declaración y Programa de Acción de Viena**”, en su preámbulo establece que “los derechos humanos tienen como principio la dignidad y el valor de las personas, por lo que debe ser el principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización” (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993) y señala que:

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

Esta declaración afirma que los Estados no deben tolerar ningún tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres y las niñas, e incluye la violencia más extrema, haciendo referencia directa al femicidio y otros asesinatos relacionados con el género. Los Estados deben presupuestar los recursos necesarios para trabajar en temas de prevención, erradicación de la violencia en contra de la mujer, y garantizar una atención prioritaria a mujeres víctimas de violencia que se encuentran en situación de riesgo.

La **“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”**, conocida también como Convención de Belém Do Para, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada por Ecuador el 15 de septiembre del año 1995, tiene como principio fundamental la no violencia contra la mujer, insta a los Estados Partes a no admitir ninguna forma de discriminación, vulneración de sus derechos en el entorno social, cultural y político; en sus artículos establece:

Art.1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Art. 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o

en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual (Organización de los Estados Americanos, 1994).

La violencia ejercida a la mujer determina minimizarla y garantiza la subordinación ante el hombre. Por tal razón, la Convención, exige a los Estados Parte aprobar normas y políticas públicas para prevenir y sancionar los diversos actos de violencia cometidos en contra de la mujer, es así que los gobiernos tienen la obligación de dar solución a esta problemática.

“La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, del 1995, define a las desigualdades entre hombres y mujeres como cuestión de derechos humanos, su principio es hacer realidad el cumplimiento de los derechos de la mujer en la sociedad.

En su Objetivo Estratégico C.5, párrafo 118, en su esfera denominada “Aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres”, establece:

La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad (ONU MUJERES, 1995, pág. 118).

La Plataforma reconoce la violencia contra la mujer, la cual se agrava por los estereotipos sociales, culturales que impiden la igualdad de género; y, el verdadero acceso y empoderamiento de la mujer en la sociedad; establece, el compromiso de los Estados Partes en adoptar mecanismos necesarios para asegurar la igualdad de condiciones frente al hombre en todos sus derechos fundamentales, garantizando el acceso a la educación, al ámbito laboral; y, a la justicia, para lo cual, los Estados deben reformar sus leyes con enfoque de género, con el fin erradicar la violencia contra la mujer, las leyes deberán ser difundidas en la sociedad garantizando el pleno conocimiento de la mujeres de sus derechos que han sido vulnerados; y así exigir su cumplimiento.

Los instrumentos internacionales mencionados dan cuenta de la obligación que tienen los Estados. Todo acto de violencia, discriminación contra de la mujer debe ser sancionado por el Estado a través de normativas, políticas públicas con enfoque de género, que garanticen una vida libre de violencia. El Estado debe reconocer que la violencia contra la mujer no es un tema privado, biológico o doméstico, sino que es un tema de género que afecta a la mujer por el hecho de ser mujer, por lo tanto, el Estado debe sancionar los actos de violencia contra la mujer con la misma importancia y trascendencia que lo hace con cualquier otra problemática. Instaurando verdaderos procesos judiciales que no sean sesgados, lo que garantiza un verdadero acceso a la justicia; y, reconocimiento de la violencia como problema estructural que está impregnado en los tejidos de la sociedad y no permite la igualdad entre hombres y mujeres.

Marco Constitucional y Nacional de los derechos de la mujer en Ecuador.

El Estado ecuatoriano ha ratificado los convenios internacionales referidos en el acápite anterior, que tienen como fin impulsar la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.

La Carta Magna tiene como principio fundamental la igualdad, reconociendo que los legisladores van más allá de la igualdad ante la ley e incorporan el derecho a la igualdad material y no discriminación, identificando que los diversos actos de discriminación se han ejercido a varios grupos de personas, entre ellos las mujeres, lo que ha generado una lucha por parte de organizaciones sociales, que han permitido establecer principios para la obtención efectiva de la igualdad. Así, en el numeral 2 de su artículo 11 establece que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, sexo, identidad de género, identidad cultural. La ley sancionará toda forma de discriminación” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En este sentido la igualdad es tanto un principio como un derecho y juega un papel trascendental al momento de hacer efectivo el ejercicio de los derechos.

En el Artículo 66, garantiza el derecho a la integridad física, psíquica, moral, sexual y al disfrute de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, adoptando medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Para lo cual, en su Artículo 70 establece que el Estado deberá formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través de mecanismos especializados de acuerdo a la ley, con un enfoque de género en los diversos

planes, programas que otorgue el sector público. De manera concomitante, el Estado debe proteger y otorgar mecanismos que permitan exigir el cumplimiento, respeto íntegro de los derechos de las mujeres que han sido vulnerados, a través del ámbito legal, social y cultural.

En el Artículo 75, garantiza el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, buscando que los actos de violencia cometidos contra la mujer no queden en la indefensión e impunidad dentro de un proceso judicial. Para lo cual, todo acto investigado deberá contar con un debido proceso; el administrador de justicia deberá garantizar el cumplimiento de la norma y el derecho de las partes. El Artículo 76, numeral 1, establece mecanismos para la reparación integral del derecho que ha sido vulnerado, al ser estos reconocidos y sancionados permite una verdadera restitución, indemnización y garantía de no repetición, según el Artículo 78.

Es así que en el Artículo 81, la Constitución garantiza que se contará con procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio, así como los que se cometen en contra de grupos de personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección (denominados grupos de atención prioritaria). Por lo tanto, en este artículo se dispone que se nombraran fiscales, defensores especializados para el tratamiento de estas causas garantizando un debido proceso.

El Marco Constitucional ecuatoriano busca garantizar una vida libre de violencia y no discriminación para las mujeres, reconociendo sus necesidades y demandas en las esferas públicas y privadas; se cuenta con avances trascendentales, sin dejar de reconocer que seguimos inmersos en el problema estructural, con raíces de discriminación, estereotipos y prácticas culturales que naturalizan las relaciones de poder y perpetúan la

situación de subordinación de la mujer, lo que demuestra que la mujer está en condición de desventaja frente al hombre.

La Constitución, acerca a los ciudadanos y ciudadanas a vivir en una sociedad de igualdad, pero esto no garantiza su cumplimiento por el sólo hecho de estar incorporado en ella, se debe difundir, promover y sobre todo vigilar su cumplimiento, lo que garantiza la igualdad de la mujer frente al hombre.

En esta línea, y en relación con la garantía del derecho a una vida libre de violencia, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, establecen mecanismos, sanciones y procedimientos para la prevención, protección, sanción y reparación a las víctimas.

Código Orgánico Integral Penal.

Aprobado por la Asamblea Legislativa en el año 2013, con publicación en el Registro Oficial N° 180; el 10 de febrero del 2014, entró en vigencia en el mes de agosto del mismo año. En la sección segunda, dentro de Delitos contra la integridad Personal, en el párrafo primero se ocupa de los Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar:

Art. 155.- Toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familia-res, íntimos, afectivos,

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica las siguientes formas de violencia ejercidas contra la mujer, en su Artículo:

156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

En su Artículo 157 tipifica la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar: “todo acto que ocasione perjuicio en la salud mental por perturbación, amenaza, manipulación”; en sus tres incisos tipifica las formas de violencia psicológicas que se ejercen sobre la mujer: “violencia psicológica leve, moderada y grave”.

Al tipificarse en el Código Orgánico Integral Penal el femicidio, en su Artículo 141 lo menciona como un “acto de violencia que está acompañado de relaciones de poder del hombre sobre la mujer”, se genera un avance trascendental en los derechos de las mujeres en el Estado ecuatoriano, este delito que no se encontraba tipificado en la normativa penal anterior, era considerado como figura no legal crímenes pasionales.

El Capítulo Tercero del Código Orgánico Integral Penal establece las medidas de protección a favor las víctimas de violencia, Artículo 558, inciso 4; establece la extensión de una boleta de auxilio a favor de la mujer o miembros del núcleo familiar en caso de violencia, así también, en su inciso 5 establece la salida del domicilio del agresor que pusiera en riesgo la integridad física, psicológica y sexual de la víctima; en el inciso 12 el

administrador de justicia deberá fijar una pensión alimenticia de subsistencia a favor de la víctima de violencia.

El Estado ecuatoriano busca, a través de la normativa penal citada, garantizar una vida libre de violencia para la mujer, sancionando todo acto que viole y discrimine sus derechos fundamentales.

1.2. Marco teórico

Si nos remontamos en la historia de la discriminación contra la mujer observamos que desde épocas pasadas las tradiciones grecolatina, judaicas, pueblos escandinavos, germano, culturas orientales, islámicas; impusieron el rol de la reproducción, el cuidado de los hijos, la atención, el servicio y la obediencia a su esposo. De acuerdo a Mannarelli (2009), el incumplimiento del rol ocasionaba castigos severos, por ejemplo, los judíos lapidaban a la mujer adúltera; en la época de la santa inquisición, al ser declarada la mujer culpable de adulterio, blasfemia o brujería eran cortadas por la mitad; los griegos obligaban a la mujer a tener vestimenta de niñas. La violencia contra las mujeres, a lo largo de la historia, es una constante, está relacionada con el ejercicio de poder, de quienes son considerados superiores.

Así, los estudios realizados sobre la violencia que se ejerce contra la mujer nos permite afirmar que:

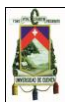
La violencia, cuya raíz etimológica está en el concepto de fuerza, conlleva el uso de la misma para provocar daño, y a su vez nos remite al concepto de poder. La violencia es siempre una forma de demostrar que se ostenta el poder mediante el empleo de la fuerza, sea física, psicológica, económica, política, e implica la existencia de un superior y de un subordinado (Cagigas, 2000, pág. 310).

La violencia es un problema estructural que afecta la vida de las mujeres perturbando su dignidad personal. Departir de violencia contra la mujer es reconocer que la violencia se ejerce hacia las personas subordinadas “mujer”, por la desigualdad real que existe entre hombres y mujeres, la cual subsiste por las relaciones asimétricas de poder que se originan por las construcciones sociales y culturales en las identidades de género. Aspecto que concuerda con el criterio de Foucault (citado en Calderón, 2013), quien determina “el poder es una relación asimétrica que está constituida por dos entes la autoridad y la obediencia”.

Lo que nos permite comprender que hablar con enfoque de género no significa solo mirar las diferencias impuestas a hombres y mujeres, es tomar conciencia y exigir su erradicación (Camacho, 2014). El género no solo debe cuestionar la existencia de la esencia femenina y masculina, debe reestructurar las relaciones entre el sexo femenino y masculino promoviendo la erradicación, la naturalización de las desigualdades que se establecen entre estos.

Arroyo determina que todas las personas deben tener igualdad de condiciones en el acceso, goce y ejercicio de los derechos, tanto de jure como de facto, sin discriminación alguna ya sea por sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole o condición, reconociendo la diversidad de las condiciones como parte inherente de las y los sujetos en la sociedad para ser tomados en cuenta y no como un obstáculo para la inclusión (Arroyo, 2012).

Por lo tanto, la igualdad es un principio jurídico universal que buscan erradicar las desigualdades impuestas por la violencia estructural entre hombres y mujeres. La igualdad de la mujer frente al hombre no se obtiene con el solo reconocimiento de las desigualdades por parte del Estado y la sociedad, es comprender que mientras siga primando el sistema



patriarcal y no se erradique de raíz la violencia estructural, la violencia contra la mujer no terminará con la construcción de leyes.

El reconocimiento de la mujer en la sociedad ha supuesto un reto importante, sin embargo en el siglo XXI se constituye un desafío para al ámbito social, político, cultural lograr la inclusión e igualdad de género. Buscando erradicar el sistema patriarcal que hasta la actualidad ha sido difícil de romper.

El concepto de igualdad de acuerdo a Campoy (2007) señala que “la misión básica de la igualdad no consiste en acabar con la diversidad, sino en hacerla posible para que no se transforme en una discriminación injustificada” (pág. 113). Es evidente que la igualdad tiene una directa repercusión no sólo social sino también jurídica y política; no obstante, es el valor ético de ésta, desde su dimensión filosófica, lo que le permite tener un amplio alcance en cada uno de los escenarios en que se aplica.

El Estado ecuatoriano ha reconocido la igualdad real de la mujer frente al hombre garantizando la no discriminación, la no vulneración de sus derechos, reconociendo que la mujer tiene la capacidad de decidir y actuar en la sociedad, por lo tanto, se encuentra claramente respaldada por las leyes, garantizando, por consiguiente, el derecho a una vida íntegra, libre de violencia física, psicológica, sexual, con adopción de las medidas suficientes y necesarias para prevenir, erradicar y sancionar las diversas formas de violencia que pueden tener un final fatal contra la vida de la mujer.

Al permitir el Estado un verdadero acceso a la justicia que garantice y proteja los derechos de las mujeres que han sido vulnerados, no se habla con un verdadero enfoque de género. Hablar de un verdadero enfoque de género es permitir a las mujeres una participación que se reconozca y garantice sus derechos, sin identificar superioridad



alguna, debiendo asimismo reconocerse tanto intrínseca como extrínsecamente que los hombres y las mujeres son diferentes biológicamente, pero no lo son en el ámbito cultural, social y político.

La desigualdad incide en la violencia contra la mujer, por tanto, es lucha constante llegar al marco de la igualdad, eliminando todos los elementos que contribuyen a incrementar las brechas de desigualdad implementadas por el sistema social. Es un problema estructural que parte de una realidad desigual y discriminatoria. En este sentido, las Naciones Unidas declaran que la violencia contra la mujer manifiesta la necesidad de eliminar las desigualdades de poder para hacer respetar los derechos de la mujer, la vulnerabilidad de la que son víctimas las mujeres se comprende como una condición que se deriva de la negación de sus derechos por la imposición de estereotipos.

Esto sin duda alguna significa de-construir las concepciones y estereotipos mal infundados, que se han impuesto de forma equívoca en la conciencia social, y su única manera de trabajar contra esto, en estos procesos sociales y que lleven luego tanto a los espacios sociales como familiares, educación en género, para transformarlo en un estilo de vida.

1.3. Tipos de violencia

Como hemos podido mirar a lo largo del desarrollo del presente capítulo, por la complejidad que representa trabajar sobre temas de violencia, es menester identificar a la misma como un problema de reconocimiento estatal, con un abordaje integro tanto en el ámbito de su prevención como en su erradicación. Es por ello que la violencia que se ejerce en contra de la mujer es un factor que afecta el estado físico y emocional de la

persona, ubicándola en un estado de indefensión y vulneración, sumado al contexto de recibir o no respuesta oportuna por parte de su entorno y/o por parte del Estado.

La violencia contra la mujer es un problema que afecta a la sociedad en sus esferas públicas y privadas, sus víctimas directas son dentro de la familia, todos o gran parte los grupos de atención prioritaria como son: mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores sin distinción de sexo, mujeres embarazadas, entre otros.

La violencia contra la mujer es un asunto de salud pública, por tanto de interés y responsabilidad del Estado. Tanto la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW, como la Convención “Belem Do Pará” han dejado claro que la violencia contra la mujer tiene diferentes formas y se da en diferentes ámbitos de la vida de la mujer.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2011) en el Ecuador el 60,6% de las mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia, el 61,4% en la zona urbana; y, el 58,7% en la rural; las formas de violencia ejercidas contra la mujer son: violencia física, psicológica, sexual y patrimonial:

- el 53,9%, han sufrido violencia psicológica;
- el 38,0% han sufrido violencia física;
- el 25,7% violencia sexual; y,
- el 16,7% violencia patrimonial.

Como podemos observar la violencia de género es un problema público que se presenta en diversas formas en contra de la mujer. De acuerdo a Camacho (2014), se identifica los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

Violencia Física: es aquella que se ejerce con el fin de causar un daño físico en la víctima, lo que ocasiona incapacidad y no permite continuar con sus actividades

diarias; los agresores al conocer que los golpes, lecciones, ejercidos en contra de la mujer son sancionados por la autoridad competente utilizan mecanismos diferentes de violencia que no dejen huellas sobre las víctimas.

Violencia Patrimonial o económica: en esta violencia existe una subordinación económica como consecuencia del dominio y autoridad que la pareja o familiares ejercen sobre la mujer, privándole el derecho a laborar y administrar sus bienes.

Violencia Psicológica o emocional: ocasiona una baja autoestima en la víctima, a través del miedo, del insulto, de la amenaza y chantajes que se ejerce sobre la víctima.

Violencia Sexual: este tipo de violencia es ejecutado por las parejas, ex parejas, personas extrañas, que haciendo uso del poder toman a la mujer con el fin único de satisfacer sus instintos ejerciendo fuerza física (pág. 75).

Las diferentes formas de violencia son el resultado de los roles impuestos por el constructo social que configura un sistema de dominación y sometimiento. La violencia es injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana de la mujer.

El Estado ecuatoriano, en el Código Orgánico Integral Penal, tipifica y sanciona las diversas formas de violencia cometidas en contra de la mujer; aspecto positivo debido a que reconoce los derechos fundamentales de la misma, más no garantiza el cese de la violencia; por cuanto, al construir la normativa se invisibiliza los riesgos al que se somete a la mujer al seguir un proceso largo y no expedito, que en vez de dar una respuesta rápida, ágil y oportuna genera un riesgo latente para su vida.

En el año 2018 con **Registro Oficial No. 175**, se promulga la: “**Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres**”, normativa que incorpora, a más de la

trilogía de los tipos de violencia ya conocidos por todos y todas, otras formas de violencia contra la mujer:

- a) **Violencia física:** todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física.
- b) **Violencia psicológica:** cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.
- c) **Violencia sexual:** toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia.
- d) **Violencia económica y patrimonial:** es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres.
- e) **Violencia simbólica:** es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

- f) **Violencia política:** es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.
- g) **Violencia gineco-obstétrica:** se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos (Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018).

Esto marca un antes y un después en nuestra legislación, generando un avance transcendental para el Estado, con lo cual le permitirá coadyuvar a eliminar estereotipos impuestos por los patrones socioculturales, reto que se trabaja día a día, a través de la prevención, concientización, concienciación y sensibilización sobre la violencia contra la mujer, buscando un estado ideal de derechos y justicia social.

La violencia de género afecta el bienestar de las mujeres e impide su participación en la sociedad. Tras décadas, los movimientos de mujeres, la sociedad civil, han buscado erradicar las diversas formas de violencia y discriminación contra la mujer. A través de la construcción de leyes, políticas públicas, que garanticen la prevención, un verdadero acceso a la justicia por parte de las mujeres. El derecho de las mujeres es tener una vida libre de violencia, y está consagrado en los tratados, convenios internacionales. El Comité de la CEDAW, en sus recomendaciones, numeral 12 establece: “los Estados Partes deben proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia” y, en su recomendación, numeral 19 instituye: “los Estados Partes deberán adoptar medidas apropiadas para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo”.

El Estado ecuatoriano ha dado pasos trascendentales para erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo, al existir la violencia estructural influye en el mantenimiento de las relaciones de poder que perpetúan la subordinación de la mujer frente al hombre.

1.4. Círculo de la violencia

Es importante destacar por otra parte, que frente al análisis de la violencia no basta con identificarla meramente como la conjunción de las inequidades y/o formas de discriminación, sobre la base de los roles impuestos por el constructo social, mismos que ocasionan un desequilibrio de poder entre los hombres y las mujeres, sino que con ello es preciso identificar el *círculo de la violencia*, que no es más que una secuencia repetitiva de actos violentos que pueden ocasionar un final fatal, como la muerte de la mujer. Se concibe, para este efecto, que la violencia ejercida en las relaciones personales e íntimas son actos de orden privado y, al corresponder a esta esfera, se considera que estos hechos no deben obtener la intervención del Estado.

Con este criterio, la mujer carga con la responsabilidad y con la culpa de la conducta violenta ejercida en su contra, lo que ocasiona sentimientos de pena y vergüenza por no poder romper con las relaciones de poder, que no solo se ejerce de manera directa contra la mujer, sino también involucra a su núcleo familiar (hijos, hijas).

De acuerdo a Lagarde (2006), el círculo de la violencia se desarrolla de la siguiente manera:

El ciclo de violencia comienza en la infancia, la niñas ven a su madre y mujeres de su alrededor subordinadas, su palabra vale menos que la del hermano, el padre, el varón tiene más permisos para salir que la mujer y menos deberes que

cumplir en casa, así sucesivamente se normalizan ‘los cautiverios de las mujeres’ (Pinilla, 2015).

Las inequidades contra la mujer se presentan de manera natural, según la cita que precede, y que no hace sino relatar el diario vivir de nuestra sociedad, van mirando desde la temprana edad, creándose con esto, falsos positivos que someten desde el pensamiento y habla a las mujeres a las disposiciones masculinas, lo que detona y desencadena en violencia de género, derivando, de dicha construcción social, la imposición de roles y estereotipos unos para hombres y otros para mujeres. Con esto se evidencia que la violencia contra la mujer se ejecuta de manera cíclica, lo que significa la presencia de varias etapas que van desde la aceptación, la explosión y el enamoramiento de su agresor, ubicando a la mujer en un peligro latente.

La etapa cíclica de la violencia se acrecienta y permite el sometimiento de la mujer hacia el hombre, accionar que se ha impuesto por los conceptos de género que determinan los roles que ejercen en la sociedad. A medida que el círculo de la violencia se intensifica, la mujer está en un peligro latente por no romper los roles de subordinación, dependencia emocional, económica; la mujer perdona a su agresor y, de esta manera, se repite el círculo de violencia, fase de tensión, explosión y luna de miel, al no tener una respuesta oportuna por parte del Estado se puede llegar al cometimiento de la violencia más extrema, su muerte, el “femicidio”.

Es importante comprender cada etapa del círculo de violencia, de acuerdo a Ruiz y Almodóvar (2012), son: a) **Etapas de la acumulación:** el agresor ejerce mecanismos internos de iras que no demuestra de manera inmediata a su víctima, con el fin de poder generar ese poder o dominio, lo que ocasionará que la mujer se someta a las diversas formas de violencia que se ejercerán o que se están ejerciendo de manera sutil,

naturalizando las mismas, b) **Etapas de explosión:** el agresor estalla ante su víctima con furia, sin importar el daño que pueda generar de manera permanente o temporal, en la etapa de la explosión se puede llegar a ocasionar la muerte de la mujer. La víctima, al identificarse inmersa en esta fase, expresa su enojo buscando sistemas o medios que sancionen los actos de violencia, al identificarse esta fase es trascendental que la víctima obtenga una respuesta oportuna, c) **Etapas de arrepentimiento:** el agresor, al sentir la pérdida de poder sobre su víctima, activa mecanismos de sumisión y lástima que ocasionan a la víctima un sentido de culpa, además del sometimiento, de manera inmediata, ante su agresor, que concibe un ideal de cambio verdadero, sumándose un sentido de culpa ante su agresor.

En estas etapas, al no tener una intervención oportuna, por parte del Estado, pueden detonar en la muerte de la mujer, criterio que se emite debido a que el agresor, al momento de ejercer el poder, no mide el resultado final del acto de violencia.

De acuerdo a Walker, el ciclo de la violencia está ampliamente aceptado como uno de los procesos que explican la permanencia de la víctima con su agresor en tanto que la mujer queda enganchada en una fantasía de cambio por parte del hombre. El ciclo de la agresión está compuesto de tres fases distintas, las cuales varían en tiempo e intensidad para la misma pareja y entre las diferentes parejas. Estas fases son: 1) la fase de acumulación de tensión; 2) la fase de agresión, y 3) la fase de arrepentimiento (Boira, Marcuello-Servós, Otero, & Sanz, 2015).

Las fases de violencia ejercidas en contra de la mujer están entrelazadas las unas con las otras, demostrando con ello que lo uno conduce a lo otro. En otras palabras, no existe violencia física sin violencia psicológica. Por tanto, se perpetúa el círculo de la violencia, mismo que genera una dependencia emocional directa de la mujer, habituándose

a ello, con lo que se naturalizan los posteriores episodios de violencia, lo cual impide visibilizar y/o reflexionar que su vida está en peligro inminente y constante.

Es por ello, entre otros factores, que caracterizan a la violencia, y se menciona que el Estado debe identificar que el femicidio no es una problemática aislada, en relación con las demás formas de violencia ejercidas en contra de las mujeres, sino más bien debe convertirse en un *deber ser*, en cuanto a garantías se trata, buscando la prevención, a través del *no cometimiento* de este delito, pero de efectuarse existen mecanismos sancionatorios.

Gráfico del círculo de la violencia:

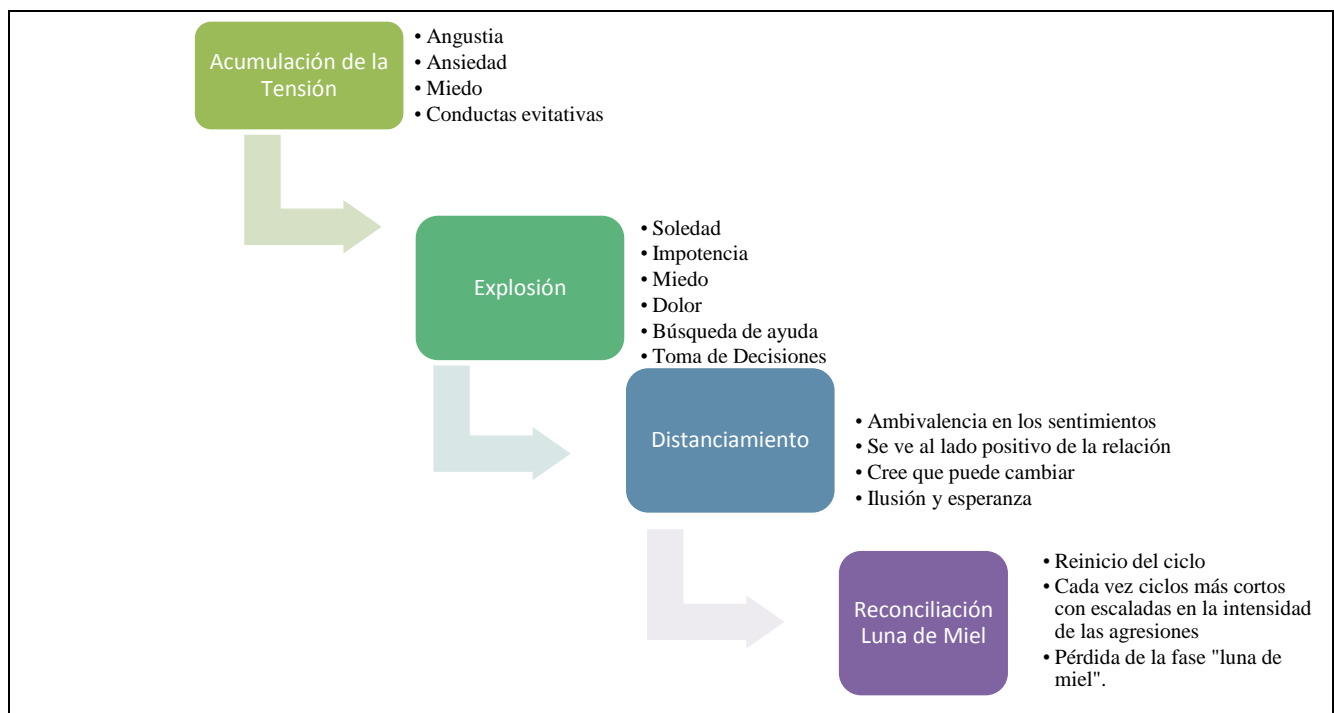


Gráfico 1. Círculo de la violencia

Fuente: Walker (1979)

1.5. Causas de la violencia intrafamiliar

Las causas de la violencia y la discriminación en contra de la mujer son de carácter multifactorial, de acuerdo a Durán (2012) en su análisis, las causas de la violencia en el Ecuador son:

- a) Una familia en la que el padre es agresivo, lo que impide que los hijos tengan una infancia y adolescencia feliz.
- b) Insultos frecuentes entre la pareja.
- c) Alcoholismo y drogadicción.
- d) Problemas económicos de la familia.
- e) Infidelidad en la pareja.

A partir de esta consideración, las causas de la violencia contra la mujer son impuestas por el constructo social y justifica la misma, ubicando a la mujer en un estado de indefensión, sumisión y discriminación, lo que demuestra que las causas de violencia se producen por diversos factores culturales, sociales, étnicos y económicos, primando de esta manera las desigualdades históricas que se han atribuido a hombres y mujeres en los espacios públicos y privados y que han perpetuando las formas de violencia contra la mujer. Causas que no siempre son las mismas para los diversos actos de violencia, es habitual escuchar en la víctima justificación sobre los hechos vividos, al tener una educación social y cultural que normaliza la violencia e identifica los golpes como sinónimo de amor; control que empieza desde la casa por el modo de vestir, la prohibición de relacionarse con personas del otro sexo, la privación en la administración del dinero, etc.

En este contexto, las diferencias entre hombres y mujeres se han traducido en una gran desigualdad real que han derivado en deformadas relaciones de poder, donde

se ha manifestado constantemente “la dominación masculina, la discriminación hacia las mujeres y los atentados hacia sus derechos, que son el resultado de los procesos de socialización de las construcciones sociales y culturales de las identidades de género” (Consejo Nacional para la Igualdad de Género , 2014).

En virtud de esta consideración, vale la pena destacar lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a que la subordinación de la mujer se agrava cuando los estereotipos sociales implican una distribución de facultades y derechos a favor del hombre y en detrimento de la mujer, “se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades” (Capaldo, Clérico, & Sieckmann, 2012). Esto se relaciona directamente con una discriminación notoria respecto al acceso a la justicia que tienen las mujeres.

Existen muchos casos de violencia que no se llegan a denunciar por vergüenza, miedo, temor o represalias de su agresor. Los diferentes estudios coinciden que el origen de la violencia es de carácter multifactorial. Según señala Hewkes (2004), la causa principal es la “cultura de violencia”, que supone la aceptación de la violencia como la única forma adecuada de resolver los conflictos que se presentan en las diversas relaciones de hombres y mujeres.

Las mujeres víctimas de violencia conciben roles de sumisión ante las acciones negativas que se efectúan en la cotidianidad, reconociendo el control adquirido sobre la mujer no solo en la esfera de lo privado sino de lo público, observándose la obligación de los cánones de la sociedad.

La violencia cometida en contra de la mujer genera consecuencias, entre las cuales se puede enunciar físicas: que ocasionan lesiones que producen daños leves o permanentes,



hasta cobrar la vida de la mujer; psicológicas: que impiden tomar decisiones de manera libre e independiente, el hombre ejerce de esta manera el poder y dominio sobre la mujer, lo que detona en una dependencia emocional; y la consecuencia social: al ser vista la violencia como un acto natural, recibe actitudes de hostigamiento social por denunciar los hechos de violencia que son naturalizados.

Capítulo II

2.1. El femicidio, su antecedente

El derecho, instrumento de regulación de la vida en la sociedad, ha sido construido desde la perspectiva de un sujeto jurídico supuestamente neutro que al momento de su aplicación no diferencia ni favorece a hombres y mujeres. Por lo tanto, teóricamente, su aplicación y protección es justa, equitativa y sin discriminación alguna; pero en la práctica no es así, su aplicación tiene una perspectiva masculina que invisibiliza al género femenino.

La no aplicación de un enfoque de género desde el derecho ha producido normas ciegas que invisibilizan los derechos, las necesidades de las mujeres y naturaliza el ejercicio de poder del hombre sobre la mujer; e invisibiliza y admite la impunidad de los actos de violencia y discriminación ejercidos en contra la misma.

La subordinación femenina impuesta por el sistema patriarcal origina la violencia y la discriminación contra la mujer, que como se ha señalado en el capítulo anterior, puede tener como resultado la violencia más extrema, su muerte: muchas muertes de mujeres han demostrado la posición de sumisión y desprecio a su cuerpo. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, frente a esta realidad, han buscado convertir o tipificar al femicidio como tipo penal, con el fin de sancionar y erradicar esta forma de violencia extrema.

Conocer la evolución, el reconocimiento que ha tenido la violencia contra la mujer en el sistema estructural, realidad que ha permitido se legitime el femicidio y se convierta en una figura penal específica que tipifica la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer;



por cuanto, permite reconocer que la violencia contra la mujer es un problema social, cultural y jurídico.

Los Estados, al tipificar penalmente el femicidio, identifican la estructura y dinámicas sociales que fomentan las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que están detrás de cada femicidio. El femicidio es el acto de matar a la mujer por el hecho de serlo. La literatura y estudios, sostienen que está motivado por el desprecio, odio, placer, o que tienen como único fin el control y posesión.

El término femicidio se desarrolló en el seno de un debate político que ganó relevancia jurídica a partir de los casos de asesinatos que se generaban en el mundo, cuyas particularidades criminales abrieron las puertas a una tipología penal que era necesaria en el campo del derecho para garantizar el tratamiento adecuado a este tipo de crímenes.

Los Estados de la región han incorporado el femicidio en su legislación penal de forma paulatina. Los países que lo han hecho son: México (2007), Costa Rica (2007), El Salvador (2010), Chile (2010), Perú (2011), Nicaragua (2012), Ecuador (2014).

El término “femicidio” fue acuñado por primera vez por la activista Diana Russell, en el año de 1970, quien definió al femicidio como:

Asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, es decir, muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión (ONU MUJERES, 2011).

La Antropóloga Marcela Lagarde realizó la traducción de “femicide” a “feminicidio”. Así, en el año 1994, Lagarde llevó a México por primera vez el concepto de femicidio, continuando con la línea de investigación de Russell ante los actos inhumanos de asesinatos cometidos contra la mujer, los cuales estaban acompañados de desprecio, odio y desvalorización hacia las mujeres.

De lo expuesto, podemos deducir que el antecedente para la tipificación del tipo penal “femicidio” se da como resultado de un proceso de debate, que exige la visibilización de las formas extremas de violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer o pertenecer al género femenino, en donde prevalecen las relaciones de poder opresivas del hombre, que van acompañadas de odio, misoginia. Así, el femicidio da cuenta de la persistencia de situaciones de desigualdad e inequidad que viven las mujeres como resultado de las construcciones sociales que las desvalorizan y desvalorizan lo femenino.

Con el fin de erradicar los delitos de femicidio, los Estados deben brindar información sobre las normativas que sancionan estos hechos de violencia extrema, identificando la existencia de medidas de protección que buscan garantizar la no violación de los derechos.

2.2. El femicidio y el feminicidio

El femicidio y el feminicidio son el resultado de un debate político amplio que se ha generado en el ámbito internacional, a partir de casos locales donde existió notable evidencia de que se trataron de casos más graves que un asesinato, lo cual supuso una relevancia jurídica importante debido a las particularidades de cada muerte, por ejemplo el

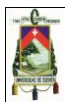
caso de ciudad Juárez. Así pues, hablar de femicidio o feminicidio implica hablar de un problema social que no está aislado de la estructura social.

El femicidio.

En el marco de la violencia contra la mujer se manifiestan diversos tipos de agresiones, entre ellas el “femicidio”, como la máxima expresión de odio y el ejercicio de un poder patriarcal que tiene el hombre sobre la mujer de manera extrema, que concluye con la muerte por el hecho de ser mujer.

Existen terminologías que aportan de manera fundamental en la construcción del femicidio. Se han generado debates, desde la epistemología feminista del empirismo y el standpoint (punto de vista), a las críticas posmodernas sobre el sujeto y el punto de vista feminista. Gemma Nicolás Lazo, en la obra “El Desarrollo de la Regularización del delito del femicidio en América Latina y el Caribe”, señala la importancia de una concepción adecuada del femicidio, evitando definiciones erróneas. De manera clara, se puede visualizar que hablar de femicidio es un accionar deliberado que la sociedad comete en contra de las mujeres. Ana Isabel Garita Vilchez busca demostrar la realidad social que las mujeres viven en el trayecto de la historia, observando actos de muerte, mutilaciones, humillaciones, todos permitidos y aprobados por la sociedad.

De acuerdo a las activistas Radford y Russell (2008), definen al femicidio como las acciones que controlan y eliminan a las mujeres ejerciendo poder, temor sobre la mujer, lo que las obliga a vivir en la inseguridad, amenazadas en condiciones inhumanas. Criterio que concuerda con el de Russell (2006), que señala al femicidio como crímenes de odio que resultan como consecuencia de un conjunto de acciones aterradoras y sexistas a



mujeres como la violación, tortura, mutilación, esclavitud sexual, abuso, maltrato físico y emocional.

En el estudio realizado por Iribarne (2016), explica que el femicidio:

Va más allá de los asesinatos misóginos, para aplicarlo a todas las formas de asesinato sexista. Los asesinatos misóginos se limitan a aquellos motivados por el odio hacia las mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas incluyen a los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres (Pág. 207).

En concordancia, Carcedo (2010), señala que el femicidio castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser mujer en un contexto social-cultural que las expone a múltiples formas de violencia. Es un concepto que contribuye a desarticular los imaginarios, creencias y prácticas sociales que ubican las violencias basadas en relaciones de opresión y subordinación entre hombres y mujeres como algo natural y tolerable, donde el factor de riesgo radica en la condición sexual, por tanto, es producto de un sistema estructural opresivo cuya forma más extrema de amenaza sexista es la muerte.

Ante las posturas expuestas, se puede deducir que el femicidio es un crimen de odio ejercido en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer o pertenecer al género femenino. El hombre concibe a la mujer de su propiedad, bajo este concepto, ejerce las diversas formas de violencia que da como resultado la violencia más extrema: su muerte, forma de violencia inhumana naturalizada por el constructo social, que está representado por el machismo, las inequidades, los estereotipos que el sistema patriarcal impone en la sociedad.

El feminicidio.

En el feminicidio encontramos elementos de misoginia e impunidad que son evidentes al investigar el nexos causal del delito. La misoginia se presenta en la huellas de odio, menosprecio, ejercidos en la mujer y la impunidad al momento que el Estado no brinda una respuesta oportuna sobre el delito investigado, como resultado, el acto no recibe la sanción correspondiente.

De acuerdo a Toledo (2012), el feminicidio es complejo debido a que abarca una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”. Como medida de solución a este problema, se tipifica el feminicidio como delito; siendo así, una medida legal y política que podría contribuir a la erradicación de esta grave forma de violencia contra las mujeres. Países como Guatemala y Costa Rica han sido los primeros en incorporar en su legislación este tipo penal, otros países han optado por el agravamiento de las sanciones para sancionar estos delitos.

Al ser Lagarde precursora del feminicidio, realiza diversos estudios, a través de los cuales explica el concepto de feminicidio y sostiene “a qué llamamos feminicidio; es una ínfima parte de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres” (Lagarde, 2005), siendo su común denominador mujeres, niñas, adolescentes que son tratadas con extrema crueldad por el simple hecho de ser mujer.

Lagarde (citado en Heim & Bodelon, 2010) propone el término feminicidio para aludir a formas de violencia extrema que pueden conllevar la muerte de las mujeres, las cuales se caracterizan, principalmente, por la misoginia, la intolerancia y la impunidad por

parte del Estado, debido a que esta institución reproduce la sociedad patriarcal, la cual reproduce la violencia. En pocas palabras, al hablar de feminicidio nos da a pensar en el papel pasivo del Estado y sus instituciones.

De acuerdo a lo planteado, el “feminicidio” es un problema que aqueja a todos los Estados sin excepción alguna. En las últimas décadas se han promulgado leyes, programas y políticas públicas que son orientadas a sancionar y a condenar la violencia más extrema contra la mujer. El “feminicidio” es la inacción, la pasividad, la tolerancia del Estado ante la suma de actos de violencia ejecutados en contra de la mujer de forma inhumana. El Estado no brinda una respuesta oportuna y eficaz que prevenga el cometimiento de nuevos actos de violencia que culminan en la violencia más extrema, su muerte, por lo tanto, sitúa a la mujer en un estado de indefensión, inseguridad e impunidad.

2.2.1. Diferencias entre el femicidio y feminicidio

En este contexto, surge la diferenciación del feminicidio en relación con femicidio, pues en el primer caso hace énfasis en la revictimización de las mujeres dentro del sistema de justicia, responsabilizando al Estado por la impunidad y la repetición de los hechos criminales, siendo ahí cuando se transforma un femicidio en feminicidio, por el hecho de que pasa de ser un caso de asesinato, por razón de ser mujer a ser un crimen de Estado, por generar y mantener las condiciones sociales para que persista tal fenómeno.

Reyes (2018), en su análisis del feminicidio, sostiene que la activista Russell hace una diferencia muy clara del femicidio y el feminicidio:

Afirma que el feminicidio es el término correcto para la lucha contra la violencia de género, lo define como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer, cometido por hombres y por el Estado. En cambio, femicidio es un término

homólogo a homicidio, esto quiere decir que femicidio sería el asesinato de mujeres.

Por otra parte, el femicidio presenta misoginia y desigualdad que se vincula con otras formas de tortura, basadas en el género de las mujeres. Para Boira, Marcuello-Servós, Otero y Sanz (2015), el feminicidio constituye una vulneración grave de los derechos humanos, en donde el Estado tiene una actuación pasiva frente a los actos de violencia cometida en contra de la mujer.

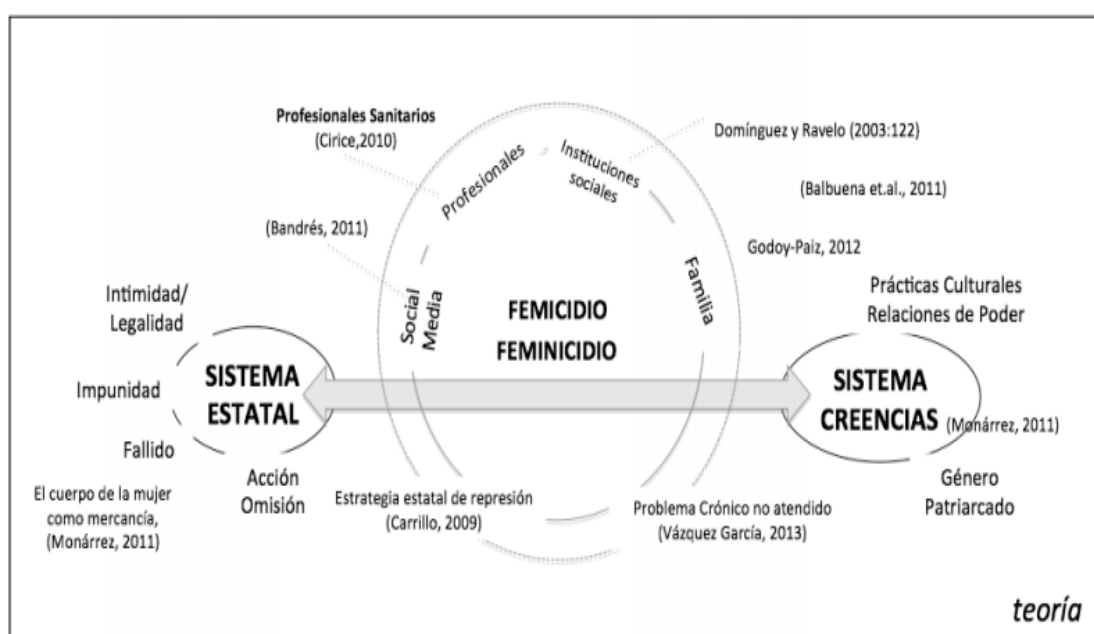


Gráfico 2. Femicidio y feminicidio

Fuente: Boira, Marcuello-Servós, Otero, & Sanz (2015).

Mientras que el feminicidio involucra directamente al Estado, se podría poner como ejemplo los conflictos bélicos que terminan con la vida de las mujeres, y es aquí en donde el Estado falla, por lo tanto, este tipo de crímenes quedan en la impunidad.

La violencia hacia las mujeres, que en muchas ocasiones desemboca en femicidio, tiene que ver con el hecho de perpetuar los patrones que se han asignado culturalmente, es decir de lo que significa ser mujer: subordinación, debilidad, sentimentalismo, delicadeza, feminidad, etc.

De lo citado podemos discernir la diferencia entre el femicidio y el feminicidio.

El femicidio es el tipo penal que sanciona la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer. El sistema estructural a impuesto estereotipos de opresión y subordinación que minimizan e invisibiliza los derechos de la mujer, y exponen a la mujer a ser víctima de la violencia más extrema, su muerte. El femicidio está acompañado de misoginia y odio. Este tipo penal se encuentra tipificado en la normativa ecuatoriana dentro del Código Orgánico Integral Penal, desde el año 2014.

El feminicidio es la muerte de la mujer por condiciones de género, toma en cuenta las relaciones de poder, autoridad, dominio, superioridad que se ejercen sobre la mujer, y se relaciona con la intervención del Estado, en su acción u omisión procedente de la impunidad existente al generar esa falta de respuesta oportuna por parte del Estado. El feminicidio no se encuentra tipificado en la normativa ecuatoriana.

2.3. Diferencias entre femicidio y asesinato

Es importante cuestionarnos ¿Por qué el femicidio y el asesinato son diferentes? A pesar de que estos delitos tienen como bien jurídico proteger la vida de un ser humano, en los dos tipos penales se ejerce la violencia al momento de cometer el acto, sin olvidar que tanto el asesinato como el femicidio son delitos dolosos.

El femicidio es la expresión de odio y misoginia a la vida de la mujer. La aspiración del hombre es dominar, desvalorar a la mujer a través de diversas formas de violencia que

pueden detonar en la violencia más extrema, su muerte. Después del cometimiento del delito, en algunos casos, el agresor exhibe el cuerpo de su víctima en espacios públicos, demostrando el poder y la superioridad que la sociedad le ha otorgado sobre la vida de la mujer.

El asesinato es un delito que trasgrede el derecho “*a la vida*”, se encuentra tipificado desde décadas pasadas en la normativa legal.

Con el fin de establecer las diferencias jurídicas del femicidio y el asesinato en el Estado ecuatoriano, es fundamental enunciar cómo el Código Orgánico Integral Penal tipifica cada uno de los delitos (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

En el Artículo 141.- “Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder, genere la muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.” Ante ello se puede acotar que el femicidio está tipificado en la esfera pública y privada. Dentro de la normativa penal, en su Artículo 142, se establece los agravantes del femicidio: tener o haber pretendido una relación sentimental; haber existido relaciones familiares, conyugales, amistad o cualquier otra que implique subordinación; que el delito de femicidio se cometa en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar; y, por último, que el cuerpo de la víctima se expuesto o arrojado en espacios públicos.

El asesinato se encuentra tipificado en su Artículo 140.- “La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. Sus agravantes son: situar a la víctima en situación de indefensión; buscar lugares despoblados o la noche; generar, de manera deliberada, dolor. Dentro de del tipo penal, “el asesinato” no se establece como principio fundamental, la muerte de la mujer por condiciones de género a diferencia del femicidio.

Al respecto Velasco (2014), sostiene:

El asesinato es una conducta penalmente relevante, antijurídica y antisocial, que trastoca el bien jurídico protegido, como es el derecho a la vida de las personas, causando alteración al Estado constitucional de derechos y la convivencia humana. Por la dañosidad social relevante, el resultado grave y fatal que su comisión infunde en la colectividad, afecta profundamente la seguridad ciudadana, las justas aspiraciones de bienestar social; y, tutela penal efectiva de los legítimos derechos. Pero, lastimosamente, el homicidio agravado es un delito que está presente en la sociedad, siendo el causante de la ruptura de la paz, el orden y la seguridad ciudadana (Pág. 12).

Conceptos jurídicos que nos permiten establecer la diferencia existente entre el asesinato y el femicidio.

- 1) El asesinato es una conducta antijurídica y antisocial que trastoca el bien jurídico, la vida de las personas, sea hombre o mujer, sin observar el género al momento de su cometimiento y en el que las razones no están determinadas. A diferencia del femicidio, que trastoca el bien jurídico, la vida de la mujer. En este caso, existe una razón, y es que el hecho se da por la condición de mujer de la víctima y está vinculado a las relaciones de poder.
- 2) Como resultado de las relaciones de poder, la literatura señala que las víctimas de femicidio lo han sido de diferentes formas de violencia de género, de tal manera que, en los casos de femicidio, en la víctima se presentan huellas de maltrato, denigración y humillación al cuerpo de la mujer, generalmente existe una agresión sexual, en tanto que en el asesinato, los indicios están vinculados con las casusas que originan el delito, por lo tanto hace alusión a las circunstancias de la infracción.

- 3) En los casos de femicidios, el sujeto activo son hombres que tienen una posición de poder frente a las mujeres. En la mayoría de los casos que se han tratado, son parejas, ex parejas, familiares. Son hombres que desean ejercer control sobre la mujer (ya sea económico, físico e incluso político), mientras que en el asesinato, el sujeto activo no guarda relación de esta índole con el sujeto pasivo, es una relación circunstancial relacionada, nuevamente con la causa que origina el delito.

Lo que permite señalar que, si bien el femicidio y asesinato atentan contra el bien jurídico de “la vida”, la diferencia sustancial está en que en el femicidio la muerte de las mujeres está relacionada a una menor valoración de su vida, como resultado de las construcciones sociales que colocan a la mujer en una posición de inferioridad.

2.4. El femicidio y la legislación ecuatoriana

Si bien la tipificación del femicidio en la normativa ecuatoriana es un avance, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en la práctica, existen aún límites. El Consejo Nacional de la Judicatura, contabiliza 588 denuncias de femicidio, menos del 50 % de denuncias formuladas han recibido una respuesta oportuna.

Conforme se ha referido antes, el femicidio se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (2014) de la siguiente manera:

Art.141.-Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Sus gravantes se encuentran tipificados en el Artículo 142:

Circunstancias agravantes del femicidio: cuando concurren una o más de las siguientes circunstancias, se impondrá el máximo de la pena prevista en el Artículo anterior: 1) Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 2) Exista o haya existido, entre el sujeto activo y la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 3) Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 4) El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

La tipificación del tipo penal femicidio, en la normativa ecuatoriana, significa un avance; más existen límites que impiden su plena aplicación, entre los que podemos citar:

El componente cultural interviene de manera directa en el componente formal, partiendo de quienes construyen las leyes: seres humanos que tienen impregnado conceptos, criterios, juicios de valor, que minimizan y discriminan las necesidades y derechos de las mujeres en la sociedad, marco que limita a los operadores de justicia aplicar el tipo penal femicidio por miedo a perder notoriedad, reconocimiento. A esto se suma presiones de orden político, social y cultura, creencias personales que el sistema patriarcal ha impuesto.

Los operadores de justicia interpretan las tradiciones, las costumbres de la sociedad en base al sistema machista, por lo tanto, protege determinados factores de clase y raza que pertenecen a una disciplina jurídica que consolida sus creencias, pensamientos y actitudes.

Es importante determinar cómo el componente normativo limita la aplicación del tipo penal femicidio, debido a que adopta una ley que establece como natural la conducta

machista del hombre sobre la mujer; particular que poner en descubierto como lo masculino es el referente para la construcción de la norma que regula las relaciones interpersonales; por ello, Facio (2004) señala que es trascendental reflexionar sobre lo mucho que se ha escrito acerca de la imposibilidad de modificar actitudes y conductas por medio de la promulgación de una ley que elimine el “machismo”. Sin olvidar cuantas veces los movimientos feministas, han tropezado con la tesis de que el machismo es una condición cultural que puede cambiar solo a través de la educación y no por intermedio de leyes; explicación que es totalmente errónea, debido a que el sexismo no solo es una actitud cultural.

Los estereotipos impuestos en la sociedad tienden a culpabilizarla y revictimizar a la mujer, lo que refuerza el sexismo y la subordinación. El Estado otorga la carga de la prueba a los familiares de la víctima y víctimas sobrevivientes, cuando es responsabilidad del Estado garantizar la no revictimización y otorgar una protección especial, particular que se obtendrá en la valoración de las pruebas, Artículo 78 (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

A esto se debe sumar una interpretación de la norma por parte de los operadores de justicia que garantice a los ciudadanos y ciudadanas, una interpretación con enfoque de género que sancione el delito cometido en contra de la mujer, sin generar sesgos que impidan un verdadero acceso a la justicia y el cese a la impunidad.

La tipificación del femicidio en el COIP, permite el reconocimiento de los derechos de la mujer que han sido vulnerados. Existen limitaciones cuya dimensión es el no reconocimiento de un verdadero enfoque de género, partiendo de que los derechos humanos, desde su origen, han protegido a los hombres, la lucha de las mujeres ha permitido conquistar espacios antes privilegiados para el género masculino, aún debe



existir una propuesta basada en la aplicación de políticas públicas que involucre activamente al Estado, aparato legislativo y la sociedad civil, con la finalidad de que la violencia de género sea comprendida en su totalidad.

El objetivo principal del Estado es reducir los actos de violencia cometidos en contra la mujer, que pueden llegar al cometimiento de la violencia más extrema. Esta problemática social no se soluciona sólo con la creación de leyes que sancionen las mismas, sino se debe articular la intervención de todo el aparataje estatal que trabaje de manera articulada en la creación de políticas públicas, programas con enfoque en la prevención del cometimiento de estos actos.

A pesar de existir limitaciones en la aplicación del tipo penal femicidio, se debe rescatar el avance que ha dado el Estado ecuatoriano al visibilizar y sancionar la violencia en contra de mujer en su más grave expresión.

Capítulo III

3.1. Trabajo de investigación en campo, su metodología

La elaboración del presente trabajo tuvo como eje transversal la metodología diseñada por Facio (2004): “análisis del fenómeno jurídico”, lo que permite observar, desde una perspectiva de género, los tres componentes del derecho, con la finalidad de obtener el resultado del objetivo general planteado en la investigación: analizar los avances y límites en la aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores/as de justicia (Jueces y Fiscales) en el periodo 2014-2016 en el Cantón Cuenca, identificando los factores que impiden a un acceso efectivo a la justicia y el cese de la impunidad.

De acuerdo a Facio (2004), la problemática jurídica no está plasmada solo en la normativa legal, su resultado tiene una trascendencia multidimensional. Ante esta realidad, es necesario aplicar un método que permita comprender los parámetros, la intención, la construcción y funcionamiento de la normativa. La investigación cumple con identificar: ¿cuál es la forma de interpretación y aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia del cantón Cuenca desde de la vigencia de la ley?

La metodología, por esencia, fue cualitativa debido a que recoge información, opiniones, emociones, discursos y, sobre todo, motivaciones que permiten obtener respuesta abierta de los actores que se encuentran inmersos en el sistema de justicia. Por ello, su interpretación permite comprender las experiencias y los conocimientos de una forma general y real, con el fin de identificar los nudos críticos que impiden una adecuada interpretación, aplicación y sanción del tipo penal femicidio.

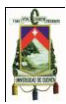
Para alcanzar el propósito de la investigación, la aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia, se empleó una técnica de entrevista semi-

estructurada que fue diseñada para obtener información clara y oportuna sobre la temática. Se contó con una guía de preguntas para el desarrollo de las mismas. Al ser entrevistas semi-estructuradas se realizaron también preguntas espontáneas que dieron a conocer más a fondo los criterios de los operadores de justicia. La construcción de la herramienta de investigación tiene como componente jurídicos los planteados por de Facio (2004), que se apegan a los objetivos específicos de la investigación.

Para ello se aplicó un guión de entrevista semiestructuradas a cinco operadores de justicia. La selección de las personas entrevistadas tuvo como guía a los diferentes actores y actrices que se desenvuelven en la administración de justicia y dan tratamiento a temas de violencia intrafamiliar, negligencia, medidas de protección y delitos cometidos contra la mujer.

Las personas entrevistadas se desenvuelven en las siguientes áreas: Jueza de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Cuenca; un Juez de Violencia contra la Mujer; un Juez de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, una Fiscal Especializada en Violencia de Género; y un Fiscal de Personas y Garantías. Los entrevistados solicitaron la reserva de su identidad, petición que se respeta y se mantiene los archivos para su corroboración y veracidad. Se procedió a analizar las respuestas con la finalidad de formular recomendaciones pertinentes para el reconocimiento de este problema y, por ende, sentar las bases para la toma de decisiones en materia legislativa y programas de prevención.

Es importante señalar las competencias de los operadores de justicia. Los jueces y juezas de violencia contra la mujer y el núcleo familiar conocen los actos de violencia física que son tipificados como contravención, el daño ocasionado a la mujer no debe exceder de tres días de incapacidad, como lo establece la normativa legal. Los fiscales



investigan los delitos cometidos en contra de la mujer y los jueces de lo penal conocen los delitos de violencia contra la mujer, violencia física que pasa de tres días de incapacidad, violencia psicológica y la violencia más extrema, el femicidio, actos que al ser tipificados como delito su competencia radica en fiscales y jueces de lo penal.

Se debe mencionar que no existió una aceptación positiva por parte de operadores de justicia del área penal para participar en la investigación, a pesar que se expuso de manera detallada cual sería el objetivo de la investigación.

Se realizó un análisis documental de dos procesos judiciales con enfoque de género, con el fin de poder observar el pronunciamiento jurisdiccional de los operadores de justicia del cantón Cuenca, desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Para lo cual se analizó y reflexionó si la decisión y participación de los operadores de justicia cumplió con el principio constitucional de garantizar “una vida libre de violencia”.

Para el análisis de casos se utilizó un método exegético que permite analizar los nudos, criterios, teorías, metodologías de investigación, estándares y precedentes en los que se fundamentan las resoluciones de la investigación de Jueces y Fiscales del tipo penal en estudio. Por lo tanto, se logra reconocer la existencia de una interpretación jurídica nacional e internacional en su resolución desde el análisis de los componentes formal-normativo, socio-cultural y estructural del derecho. Con posterioridad se mencionara los motivos que llevo a la tesista a seleccionar los casos judiciales en estudio.

Para el estudio de campo se realizó registros y grabaciones que se sistematizaron mediante instrumentos de recolección ágil y eficiente, lo que generó una interpretación sobre las normas, percepciones, conceptualizaciones y modos de actuación de los y las diferentes actoras.

En el desarrollo de la investigación se tomó en consideración los aspectos éticos. Se contó con el consentimiento informado de todos los entrevistados. Se comunicó a cada uno de los operadores de justicia que sus respuestas serían utilizadas dentro de la investigación, se garantizó la confidencialidad de los datos proporcionados. Los resultados obtenidos son empleados con fines investigativos, no existirá juicios de valor.

Método de investigación	Población que participa	Código	Numero de participación
Entrevistas Semiestructuradas	Jueza de Violencia	S.Q	1
	Juez de violencia	F.G	1
	Juez Familia	B.O	1
	Fiscal de Genero	P.M	1
	Fiscal de Garantías y personas	A.A	1
Total	Número de participantes en la investigación		5
Análisis de expedientes judiciales	Expediente judicial de femicidio, numero de causa: 01283-2016-03989	2016	1
	Expediente judicial asesinato, numero de proceso: 010101816070564	2016	1
Total	De expedientes analizados		2

Tabla 1. Metodología aplicada en la investigación

Fuente: Silvia Domínguez Calderón

Desde los objetivos enunciados, la investigación partió del análisis de casos y las experiencias de los operadores de justicia, buscando llegar a conclusiones generales de los actores que intervinieron, para luego llegar a conclusiones generales, por lo tanto fue un proceso inductivo. Así también, el trabajo se basó en el enfoque de derechos humanos y de

género para identificar las relaciones de “poder” que se manifiestan en la violencia hacia las mujeres que pueden terminar en una violencia extrema (femicidio).

El femicidio en Ecuador es tipificado en el Código Integral Penal en el año 2014, a raíz del cual, el Consejo de la Judicatura, en el año 2013, crea Unidades Judiciales de violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, constituidos con equipos especializados. En la actualidad existen 216 dependencias judiciales. También se crean Fiscalías especializadas en Violencia de Género a nivel nacional, mediante la resolución 043 del 22 de junio de 2015, creándose 70 fiscalías nacionales y protocolos especiales para investigar y judicializar los casos de muertes violentas.

Se desarrolló el análisis de casos seleccionados y se aplicó las entrevistas a los operadores de justicia. A continuación se detalla dicho análisis.

3.2. Casos de femicidio en el cantón Cuenca, periodo 2014-2016

El presente análisis de casos sitúa la responsabilidad del Estado frente a la acción u omisión de los derechos vulnerados de la mujer, al presentarse la transgresión de los derechos fundamentales, el Estado debe actuar en debida forma para prevenir, investigar, erradicar y, sobre todo, sancionar los actos de violencia cometidos contra la mujer.

La selección de los procesos judiciales se dio a partir de mi experiencia laboral dentro del ámbito de investigación y defensa de los derechos de mujeres víctimas de violencia de género, lo que permitió tener un contacto directo con expedientes e información importante, previo a la firma de convenios de cooperación interinstitucional entre el Consejo de Seguridad Ciudadana, Fiscalía y Complejo de la Judicatura de Cuenca. Se tomó como referencia dos procesos que ingresaron al sistema de justicia con la siguiente tipificación:

El primer caso ingresa al sistema de justicia tipificado como femicidio, en el proceso de investigación y resolución, por parte de los operadores de justicia, su tipificación cambia a asesinato, particular que llama la atención de la sociedad civil. Organizaciones no gubernamentales que alzan la voz ante esta vulneración derechos, por lo que se presenta un recurso de apelación ante la Sala de Penal, que resuelve la causa como femicidio, contexto que llama la atención para ser analizado.

El segundo caso genera una conmoción social por la forma de violencia extrema que genera la muerte de la víctima (violación, tortura y exhibición del cuerpo), ante esta problemática, el ex Ministro del Interior Dr. José Serrano señaló que el crimen debería ser sancionado con la rigurosidad de la ley. Aspectos que fueron importantes al momento de la selección de las piezas procesales y poder conocer el criterio de los operadores de justicia.

Se analizó la respuesta judicial a través de la observación de la aplicación de normas internacionales que protegen los derechos de la mujer, entre estas CEDAW (1992), Convención de Belém do Para (1994), instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres que han sido vulnerados e invisibilizados de manera inhumana. Esto en relación al Artículo 424 (Constitución de la República del Ecuador, 2008): “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado reconocen los derechos humanos y prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Los operadores de justicia están sujetos a aplicar los instrumentos internacionales siempre que sea favorable a las establecidas en la Constitución.

Los perfiles de las mujeres víctimas de femicidio de los casos seleccionados son:



1. Estudiante de secundaria de 13 años de edad. Sus estudios lo realizaba en el colegio Ciudad de Cuenca, residía en la casa de sus padres, ubicada por el sector del Tejar, noreste de Cuenca, extracto social bajo.
2. Mujer de 43 años de edad. Su ocupación era visitadora médica, residía por el sector del súper stock, de estado civil casado, extracto social medio alto.

A continuación se presenta los casos seleccionados con los criterios de los operadores de justicia.

Caso 1: mujer de 43 años (16 de diciembre de 2016)

En el expediente número 01283-2016-03989, investigación previa (Art. 580, COIP), la Fiscal reunió elementos de convicción de cargo, permitió la formulación y la defensa técnica de la víctima, dando paso a una segunda etapa, instrucción fiscal (Art. 589, COIP). En esta etapa se realiza la acusación en contra de la persona procesada por encontrar elementos suficientes para deducir la imputación, desarrollándose la fase de instrucción que se encuentra tipificado en el Art. 590 (COIP), en donde la Fiscal determinó los elementos de convicción necesarios que demostraron la materialidad y la responsabilidad del procesado, dando paso a la etapa de evaluación y preparación de Juicio, lo que permite la obtención de una sentencia condenatoria en contra del imputado por el caso de femicidio.

Antecedentes del hecho.

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio ubicado en las calles Montufar y Chordeleg vivió la familia conformada por los cónyuges B.E.M y L.E.C, conjuntamente con sus cuatro hijos, todos mayores de edad. Durante el matrimonio B.E.M ha sufrido toda clase de violencia por parte de su cónyuge, hasta que el 16 de noviembre del 2016,

aproximadamente a las 16h00, la pareja llegó a su domicilio luego de un viaje de trabajo, pues ella era visitadora médica, ya estando solos, en el dormitorio, su cónyuge ha protagonizado el último acto violento sobre ella y su origen habrían sido los celos cuando B.E.M se ha encontrado utilizando su celular por lo que ha reaccionado agresivamente hasta someterla sobre el piso, ella boca abajo y él sobre ella, atacándola hasta estrangularla, mientras B.E.M, intentando liberarse, ha producido rasguños a su esposo, siendo en vano sus esfuerzos, pues ya había terminado su vida. L.E.C consciente del delito cometido, y en busca de una coartada, ha ideado la forma de excluirse del crimen saliendo a una tienda para buscar testigos que le vean fuera del lugar de los hechos, regresando a su domicilio y realizando una llamada al ECU 911 e informando que su esposa ha sido víctima de un asalto por parte de dos sujetos no identificados y que no pudo hacer nada ya que él también ha sido atacado, afirmación plenamente desvirtuada por Fiscalía, pues en el lugar de los hechos no existió indicio alguno de que se haya dado un robo, sino más bien indicios que involucran a L.E.C directamente en el cometimiento del delito, siendo éstos los motivos por los que ha sido detenido en flagrancia delictual, por lo que Fiscalía considera que L.E.C es el autor directo de la muerte de su esposa. Que con la prueba que se actuará en esta audiencia probará dos “situaciones” fundamentales: que L.E.C ejercía una situación de poder sobre B.E.M y que murió a manos de su cónyuge (Proceso extraído del Complejo Judicatura de Cuenca).

Criterios de las autoridades competentes.

La Fiscal de género encargada de la investigación del delito, en la etapa de investigación previa, encontró elementos de convicción, entre estos: medios probatorios de patrones de poder ejercidos por parte del imputado sobre su víctima, pruebas documentales, testimoniales y pericias médicas; elementos que permiten a la fiscalía enmarcar el delito en Femicidio (Art. 141, COPI), dando paso a la etapa de instrucción

fiscal, en donde la operadora de justicia realizó la acusación particular en contra la persona procesada por encontrar elementos de convicción suficientes que demuestren la materialidad y responsabilidad de los hechos. Aspectos que se pueden relacionar con el criterio de Foucault, “el poder es una relación asimetría constituida por dos aspectos fundamentales autoridad y obediencia” (Calderón & Nuñez, 2013). Identificando al hombre como autoridad y a la mujer en el rol de obediencia y sumisión, lo que dentona el caso de femicidio que se analiza a continuación:

En la primera instancia, la Unidad Penal tipifica el delito como asesinato, encontrándose como elementos de convicción la muerte de la víctima. No se identificó las relaciones de poder que fiscalía encontró en su investigación. El Tribunal Penal resuelve, en sentencia el 26 de Septiembre de 2017, declarar a L.E.C culpable en grado de autor del “*delito de asesinato*” tipificado en el Artículo 140.1 del COIP, por lo que se impuso una pena privativa de libertad de catorce años y ocho meses, el pago de noventa mil dólares americanos a favor de los hijos y conforme a lo previsto en el Artículo 70, numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal, la multa de doscientos sesenta y siete salarios unificados del trabajador, en general vigentes al momento de la consumación de la infracción.

Ante esta resolución, el demandado L.E.C presenta el recurso de apelación, por no estar conforme con los años que se le imponen como pena privativa de libertad (14 años). Fiscalía también interpone el recurso de apelación, en su petición escrita señala “la sentencia emitida por el Tribunal Penal carece de un enfoque de género” (Fiscalía, 2016), invisibilizando las relaciones de poder ejercidas por el imputado sobre la víctima, el recurso interpuesto es aceptado por la Sala de lo Penal. Por cumplir con la normativa legal vigente, la Sala de lo Penal, al conocer la causa, RESUELVE con fecha del 10 de Enero de 2018 y reforma la sentencia declarando al imputado como autor directo del “*delito de femicidio*”, Artículo. 141, y sus agravantes, Artículo, 142 del Código Orgánico Integral

Penal, por lo que se impuso la pena privativa de libertad de treinta y cuatro años y ocho meses, multa de mil trescientos treinta y cuatro salarios unificados del trabajador, en general, y el pago de setenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a favor del padre de la víctima como reparación integral.

La sala expone que en la sentencia emitida por el Tribunal Penal no tuvo una interpretación con enfoque de género, generándose una interpretación errónea puesto que no existió un análisis del contexto de violencia y vulnerabilidad de la víctima, no se tomó en cuenta el ejercicio de poder en sus diferentes manifestaciones: física, psicológica y sexual. No se manifestó en la sentencia elementos como: ¿cuál fue el contexto en el que se desarrolló la víctima?, ¿cuál fue su nivel de vulnerabilidad?, ¿cómo se manifestó esta relación de poder para inferir que el destino final, es decir, la consecuencia de tal acto? De la misma manera, en la resolución del Tribunal Penal no se aplicó la normativa internacional.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), es el primer instrumento jurídico internacional que señala la violencia contra las mujeres como una forma de violencia específica, producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y la define como: cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer , 1994).

Normativas internacionales que buscan garantizar la no discriminación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos, a pesar de que su aplicación está tipificada en la Constitución: Art. 424 y 426 (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Caso 2: adolescente 13 años (1 de julio de 2016)

El proceso ingresa a fiscalía el 27 de junio del año 2016, las etapas que se desarrollan en el expediente número 010101816070564, son investigación previa (Art. 580, COIP). El Fiscal de Persona y Garantías reunió elementos de convicción de cargo y descargo que permitieron el desarrollo de la segunda etapa. Instrucción fiscal (Art. 589, COIP), en esta etapa se identifica a cuatro posibles responsables del cometimiento del delito. Fiscalía solicita a la autoridad competente, prisión preventiva en contra de los procesados (Art. 534, COIP). En la etapa de evaluación y preparación de Juicio se solicita como prueba las pericias médicas (ADN) a cada uno de los procesados; el resultado de la prueba de ADN fue negativo. El Juez competente del juicio 01283-2016-04849G, ante este resultado resuelve revocar la prisión preventiva, debido a que los procesados no son responsables del cometimiento del delito y se declara su inocencia.

Antecedentes del hecho.

El día primero de Julio de 2016 la señora T.T comparece ante el Fiscal de Turno del Azuay y describe con sus propias palabras que su hija A.M, de trece años de edad, sale de su casa con dirección a su colegio, ya que tenía clases de recuperación; vestía el uniforme de la institución porque tenía clases de 8h15 hasta las 9h15. Pasado ese tiempo, su hija no llegaba a casa por lo que procede a llamar a la institución para saber de ella, sin respuesta alguna acude a la institución a buscar a su hija, procede a llamar a su esposo y a la amiga de su hija, quien responde no haberla visto en la parada de bus, por lo que acude al hospital, sin tener respuesta alguna decide poner la denuncia.

Versiones de las partes.

El 5 de Julio la vecina de A.M procede a declarar que al enterarse de la desaparición de la niña, procede a publicar información de este suceso, en la red social Facebook, el día 4 de Julio a las 11h00 am, y que a las 10h57 de la noche recibe un mensaje de una mujer, la misma que le indica que tres hombres secuestraron a la menor, le envía una foto de un hombre y una mujer, indicando que él había cometido el delito y que responde a los nombres de L.R, acusándolo de violador. Le facilita un número de teléfono de una mujer y le indica que pregunte por él.

El 17 de Julio de 2016, tres hombres que acuden a pescar en el sector del Tennis y Golf Club, Barabón, encuentran un bulto negro, por lo que proceden a revisar evidenciando así que se trataba del cuerpo de una mujer. Pudieron divisar el sello de la institución, por lo que inmediatamente llaman a la policía, quien realiza el levantamiento de cadáver. Luego de las pruebas pertinentes confirman la identidad de la niña desaparecida.

El 29 de Agosto de 2016 M.M, chofer, declara que tras la desaparición de su hija V.M a horas de la madrugada salen a buscarla con su esposa y suegros por el sector de Barabón Medio; “dos sujetos en moto nos gritaron que sigamos buscando”, sin tener respuesta alguna proceden a dirigirse al sector de la parroquia Baños, de igual forma no tuvieron respuesta alguna, y nuevamente se encuentran con estos dos sujetos C.G y J.M, quien volvió a preguntar por su hija, recibiendo un golpe en la nariz, procediendo a esconderse en una tienda, aduciendo que son menores de edad y no pueden meterlos presos. Luego mi hija me llama indicándome que C.G le ha dicho: “yo tengo a la hija del viejo”. En la noche mi suegra me llama indicándome que mi hija había regresado a casa, por lo que regreso y observo a mi hija pálida y golpeada y me indica que ha sido amenazada con un cuchillo; procedo a llevarla al doctor, quien me indica que no debo

tocarla porque es caso de Fiscalía. El dos de Julio le llevo a mi hija al Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, mi hija me cuenta que ha sido violada por 4 hombres: C.G, J.M, F.Ch y E.G y que a otra niña le violan entre cinco; al otro sujeto no se identificó. Mi hija, aprovechando el nerviosismo de un hombre, se escapa y esconde entre los árboles, me indica que reconoció a la chica desaparecida A.M, tras haberla visto en los carteles.

El Comando de Policía de Azuay, para informar sobre esta captura, que se realizó esta madrugada en el sector de San Pedro de Barabón, en la zona rural de Cuenca, dijo que los cuatro detenidos fueron encontrados en unas viviendas ubicadas en un sector de difícil acceso. Además, indicaron que existe un quinto implicado que aún no ha sido detenido. Ellos no tienen antecedentes penales, son jóvenes de 16 a 24 años, y uno es menor de edad. Indicaron que la información de los acusados será publicada en la página web del Ministerio del Interior para que en el caso de existir personas afectadas presenten las denuncias, con las reservas del caso. Las autoridades presumen que hay más casos de violación que los atribuyen a ellos y los calificaron como una banda. El resultado de la autopsia reveló que Muñoz fue violada y asfixiada. Se presume que murió el mismo día de su desaparición, el pasado 1 de Julio. Expediente extraído de la Fiscalía del Cantón Cuenca. (Cuenca, 2016).

Criterio de la autoridad

El delito investigado por el Fiscal fue tipificado como “asesinato, Art. 140”, para el criterio del operador de justicia no se evidencian la relaciones de poder, considerándose como un aspecto fundamental la falta de relación sentimental de la víctima con sus victimarios, factor que permite enmarcar al operador de justicia el delito en asesinato. En la investigación se encontraron pruebas de convicción que permitieron dar paso a la etapa de instrucción fiscal, el Fiscal encargado de la investigación identificó a cuatro posibles

imputados entre edades de 18 años a 24 años de edad, se realizó la prueba de ADN a tres de los cuatro procesados, dando paso al auto llamamiento a juicio, etapa en la cual se dio a conocer los resultados del ADN, ante la respuesta negativa de las pruebas de ADN, el juez competente que conoció la causa declaró en sentencia la inocencia de los imputados. La causa se encuentra archivada hasta que se encuentre elementos de convicción que identifiquen a los responsables del delito. Al ser tipificado el delito como asesinato es una venda a los ojos de los derechos de las mujeres, dejando el acto de violencia en la impunidad.

Se puede observar que por parte del operador de justicia no existió un análisis oportuno respecto a la violencia de género ejercida contra de la víctima, la cual era menor de edad. No se consideró como prueba elemental el testimonio por parte de otra menor de edad agredida sexualmente, quien refirió el historial de violencia vivido con sus victimarios.

A pesar de que la definición de la figura penal del femicidio no hace distinción de la edad de la víctima (Art. 141, COIP), sí se agrava cuando se demuestra que existió una relación de confianza (Art. 142, COIP). En los casos de muerte de niñas, existe todavía una resistencia a mirarlas como víctimas de femicidio, pues se tiende a considerarlas víctimas de otros delitos, tales como violación con muerte o asesinato. Existe un contexto poco analizado que ataña a valorar los casos de niñas y adolescentes, además de la edad como un factor de vulnerabilidad, su condición de género, de cara a los actos de violencia sexual de los que fueron víctimas, previo a su muerte.

3.3. Análisis jurídico de procesos judicializados de femicidio, periodo 2014-2016

En el primer caso se identifica que el mismo es cometido dentro del núcleo familiar, a través del ejercicio de poder, contexto que es naturalizado por nuestros patrones sociales y culturales, el hombre aquí comete el crimen demostrando su superioridad: “la víctima fue asesinada por estrangulamiento”, a más de ello, está presente la misoginia, la violencia psicológica y patrimonial. Esto se identifica por el testimonio del padre de la víctima. Se identificó, de manera clara, las relaciones de poder ejercidas.

Para Foucault, el poder es una relación asimétrica que está constituida por dos entes: la autoridad y la obediencia, y no sería un objeto preexistente en un soberano usado para dominar a sus súbditos, además es una situación estratégica que se da en una determinada sociedad; el poder incita, suscita y produce (Calderón & Nuñez, 2013).

Lo que nos permite concebir, de esta manera, dos categorías: los dominados (mujer) y los dominantes (hombre). Por lo que se puede acotar que, en este proceso, la mujer atravesó el círculo de la violencia en sus fases: acumulación, tensión, explosión y luna de miel, existieron también episodios de violencia dentro del núcleo familiar: intimidación, agresiones físicas, agresiones psicológicas, lo que indica que existieron patrones de violencia en la vida de la víctima que detonaron en femicidio.

Sobre ello, el Código Orgánico Integral Penal (2014), señala que se consideran miembros del núcleo familiar al cónyuge, la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. En materia penal no hay interpretación extensiva,

por lo cual preocupa que no se señale que constituye también violencia no solo la acción sino también la omisión.

En este caso no se consideró, en primera instancia, la violencia a la que estuvo expuesta la mujer, previa a su muerte, tampoco la situación de vulnerabilidad, ejercicio de poder, tampoco se dio la aplicación de la normativa internacional como lo tipifica la Constitución (2008), demostrando una vez más que las mujeres se encuentran sometidas a las relaciones de poder impuestas y naturalizadas por el constructo social que invisibiliza los derechos a una vida digna y justa. Criterios que sí son considerados por la Autoridad de la Sala Especializada, pues en su análisis expone que se invisibiliza las relaciones de poder y dominio. Por lo tanto, podemos sustentar que los criterios jurídicos de los operadores de justicia son diferentes de manera abismal, ya que no existe un enfoque de género que garantice la igualdad real, formal de los hombres y mujeres, por lo que se seguirán vulnerando, de manera inhumana, los derechos de la mujer.

Con respecto al segundo caso, se ocasiona la muerte de la adolescente a manos de su círculo de amistades, quien además fue agredida sexualmente. El COIP en su Artículo, 159 señala que: la persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

Artículo 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, en todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 29).

Este hecho también hace referencia a los tipos de femicidio, en este caso, el feminicidio sexual sistémico, según Asqui (2016), consiste en el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en zonas desérticas, lotes baldíos, en tubos de desagüe, en tiraderos de basura, en vías, etc. En este caso, el cuerpo fue expuesto en un lugar público, atado y maniatado con signos de asfixia.

Los tres principales procesados de este delito fueron absueltos, excepto el principal culpable, quien actualmente está prófugo de la justicia. Se dijo que no se encontraron pruebas suficientes para sancionar a los otros involucrados en este delito. En primera instancia, la sentencia fue como homicidio, según el COIP (2014), este delito la persona que mate a otra será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años, lo que nos da a conocer que el homicidio puede ser cometido por cualquier persona, indistintamente de su género.

En este caso, claramente, se puede evidenciar el odio y misoginia, debido a que la adolescente se encontró ante un total estado de sumisión al ser atacada, violada, asesinada y posteriormente su cuerpo maniatado y expuesto a la vía pública, lamentablemente este caso no fue tipificado como femicidio. El Fiscal que conoció la causa tipificó como un

asesinato. Sin embargo, cabe indicar la responsabilidad del Estado en no contar con los protocolos suficientes el caso, dándolo a conocer en la prensa cuyo protagonismo se llevó el Ministro del Interior, en su momento, para que se investigue y se haga caer el peso de la ley, más se puede indicar que en la actualidad el caso ha quedado en la impunidad.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en el río Barabón, por lo que se observa el menosprecio y repudio hacia el cuerpo de la mujer, transgrediendo además los lugares públicos, su finalidad es dar a conocer abiertamente el crimen, es así que se produjo una agresión a la víctima y a la sociedad, situación que humilla y atenta con la integridad de la personas.

Es necesario acotar que la tipificación del femicidio queda inconclusa, debido a que no existen los procedimientos para su investigación, juzgamiento y sanción. Se ha podido constatar, así también, cómo los operadores de justicia se situaron dentro de otros tipos penales existentes, como homicidio simple o asesinato.

Cabe agregar que queda inconcluso el rol del Estado para tratar el delito de femicidio. Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Así también, la no aplicación de los artículos 424 y 426 de la Constitución (Asamblea Constituyente, 2008).

Se puede apreciar en el siguiente cuadro las etapas en que se desarrollaron los dos casos analizados en el presente trabajo.

Procesos	Etapas Procesales	ETAPA PROCESAL			
		Instrucción fiscal	Evolución y preparación a juicio	Juicio	Sentencia
1	Si	Si	Si	Si	Si
2	Si	Si	Si	No	No

Tabla 2. Etapas procesales**Fuente:** Silvia Domínguez Calderón

De esta manera, se demuestra que la respuesta judicial en los procesos analizados no ha sido oportuna e inmediata, existiendo aspectos que dilatan la causa, entre los cuales se puede enunciar la represión de procesos en fiscalía, debido a que en el cantón Cuenca existen cuatro fiscales de violencia de género para todo el cantón Cuenca; la falta de enfoque de género, en la problemática, por parte de los y las operadores de justicia.

En el marco de la investigación se visualizaron elementos trascendentales que permiten comprender la ruta que se debe seguir para el acceso a la justicia y el cese a la impunidad, ante lo cual se desnuda más factores negativos que positivos, por cuanto, se permite identificar que la aplicación del tipo penal femicidio no tiene como factor principal la prevención, erradicación y, sobre todo, sanción a la violencia más extrema cometida en contra de la mujer, su muerte, particular que contribuye a la impunidad.

Se debe mencionar que en diferentes Estados existe pronunciamientos judiciales que reconocen los derechos de las mujeres, fallos que en algunas ocasiones han sido referentes internacionales que se han convertido en un emblema de lucha de las mujeres

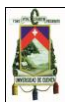
en el mundo. El reconocimiento de los derechos de las mujeres permite avanzar en los temas de género y saber cómo avanza su tratamiento. Los operadores de justicia deben aplicar en sus resoluciones normativas internacionales desde un enfoque de género, es un deber necesario del sistema. No hacerlo implica invisibilizar los esfuerzos de las sobrevivientes en denunciar un sistema que invalida y mata a las mujeres. Las sentencias deben vislumbrar una advertencia a los perpetradores de la existencia de un marco legal que protege y sanciona la violación de los derechos fundamentales de las mujeres.

Con la información recopilada se muestra la existencia de una constante dilatación de los procesos, entre una y otra etapa que ocasionan términos extensos para la obtención de una respuesta judicial. La ciudadanía, al conocer la existencia de sentencias condenatorias de los casos de femicidio, conciben que la actuación judicial es correcta y oportuna, lo que genera una falsa percepción positiva con respecto a la eficiencia de la justicia ante esta problemática.

3.4. Resultado de las entrevistas a jueces y fiscales de la Función Judicial

El objetivo de las entrevistas era conocer la aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia del cantón Cuenca, identificando la existencia de factores que impidan su aplicación, se acudió al Complejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del cantón Cuenca, con el fin de realizar la entrevistas a los jueces, juezas y fiscales. Previo a las entrevista se solicitó la colaboración de los funcionarios públicos, se explicó a los entrevistados que la información recopilada es confidencial y que de ninguna manera implicará una valoración personal o profesional de quienes participen en la investigación. Se solicitó la autorización para grabar las entrevistas.

Las personas entrevistadas tienen entre 2 a 6 años de ejercicio profesional en los juzgados y fiscalía, lo que garantiza que la información obtenida se basa en la experiencia



adquirida por los profesionales, se debe aclarar que los entrevistados, previo a ser jueces y fiscales, laboraron anteriormente en espacios como Comisarias de la Mujer, Corporación Mujer a Mujer, Víctimas y Testigos de la Fiscalía y Ministerio del Interior, lo que avala que la información brindada se basa en la experiencia adquirida a lo largo de estos años en temas relacionados a la violencia contra la mujer.

Los operadores de justicia manifestaron, desde un inicio, que los derechos humanos son la génesis de los mismos, para su obtención y reconocimiento se tuvo que dar una lucha contra la desigualdad, la vulneración y la marginación que estuvo impuesta por décadas en la sociedad. El Estado actúa como ente regulador y da cumplimiento de estos derechos.

Al ser los derechos humanos intransferibles e inalienables, indistintamente de la condición del ser humano, su aplicación no son para todas las personas debido a que no tienen un enfoque de género que invisibiliza y discrimina a la mujer, de acuerdo a Calderón y Nuñez (2013), la desigualdad está siempre presente, en cuanto a su aplicación, mayoritariamente, está enfocada a privilegiar a los hombres, limitando así la protección y no vulneración de los derechos de las mujeres.

Desde un análisis más profundo, se pudo vislumbrar que los derechos humanos no tienen un enfoque de género debido a que han sido creados por y para los hombres, invisibilizando las necesidades, vivencias de las mujeres, sin embargo, la lucha de las mujeres ha permitido que las mismas alcancen grandes logros y, sobre todo, sus derechos sean reconocidos. Aun así, no se habla de una cobertura total de sus derechos. Lo que llamó la atención en las entrevistas formuladas es la postura de un operador de justicia (A.A), quien sostuvo que los derechos humanos si tienen enfoque de género, desconociendo las desigualdades de la que han sido víctimas las mujeres.

Se reconoce que el delito de femicidio es la muerte de la mujer por razón de género, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el Artículo 141; y, en su artículo 142 sus agravantes. Cabe recalcar el criterio de un Fiscal (A.A), quien sustenta que este delito “femicidio” siempre ha existido y se lo conocía como asesinato y lo considera desvirtuado por las feministas. Ante ello se hace la interrogante ¿qué pasaría si un hombre es asesinado por una mujer?, lo que permite demostrar la existencia de un criterio alejado de la objetividad, que desvirtúa el reconocimiento y el derecho de las mujeres.

La incorporación del femicidio en la normativa legal debe ir más allá de la sanción y, por el contrario, trabajar en su erradicación (S.Q), esto también debe ser trabajado por los operadores de justicia, quienes deben interpretar objetivamente la normativa y, a más de ello, ser plenos conocedores. Cabe recalcar que el trabajo con la ciudadanía es de vital importancia, pues, de esta manera, se puede hacer hincapié en la prevención de este delito. Esto permite la sanción y la concientización por parte de la sociedad.

Más que una disminución del femicidio, según la apreciación de los operadores de justicia, estos se han visibilizado, pues anteriormente este tipo de delitos no estaban tipificados como femicidios, sino como un asesinato. Es decir, se requiere que el femicidio sea adoptado desde una perspectiva de género y de derechos humanos que permita analizar los casos de muerte de mujeres partiendo desde un contexto global y no desde un enfoque privado o minimizado.

Es importante señalar que, para la obtención de un sistema judicial garantista de derechos humanos, como lo establece la Constitución Política, se debe trabajar en mecanismos de prevención; debe existir un seguimiento adecuado en el desempeño de los operadores de justicia, en cuanto al tratamiento y seguimiento de mujeres y su familia víctimas de violencia, lo que nos permite comprender que la sanción no es el único camino

para erradicar la violencia de género, ni que los operadores de justicia son los únicos responsables de su abordaje, por el contrario, esto hace referencia a la idea de un trabajo conjunto de toda la sociedad, partiendo de la familia, la escuela y el Estado.

3.5. Análisis de los resultados finales de la investigación

La tipificación del delito de femicidio es el resultado de la violencia más extrema cometida en contra de la mujer, su tipificación es un avance fundamental en la normativa penal ecuatoriana, este particular emerge en el marco de la lucha de mujeres por obtener y transformar la titularidad y el ejercicio de sus derechos vulnerados.

De acuerdo al criterio de los operadores de justicia, la tipificación del femicidio, como delito, es una respuesta a la violencia extrema en contra de la mujer, lo que genera elementos positivos a destacar. La tipificación del tipo penal femicidio dio un mensaje de la gravedad de la violencia contra las mujeres, con esto, el Estado reflexiona sobre la necesidad de priorizar el tema a través de una política pública con enfoque de género.

El camino para la erradicación del femicidio no sólo debe estar enfocado en la sanción por parte de los operadores de justicia, es necesario trabajar en la prevención, la misma que involucra a todos los actores de la ciudadanía y las instituciones del Estado, lo que comprende: Estado y sociedad civil.

Acorde a ello, Jaramillo (2016) puntualiza que es necesario que cada país, de acuerdo a su legislación, tipificación del delito y realidad, ponga en práctica protocolos de investigación del femicidio, esto con la finalidad de conseguir eficacia en sus investigaciones para evitar fallos judiciales, reforzando además el rol de las autoridades que forman parte de la investigación.

“Si bien es cierto el femicidio tiene implícito el odio hacia la mujer y la superioridad de género, esto va de la mano con la discriminación, la cual se basa en el establecimiento de relaciones de poder, en este caso la de hombres y mujeres” (Pérez, 2018, pág. 5). En el caso 2, del femicidio de una adolescente, el mismo no tuvo sentencia, hasta la actualidad permanece en la impunidad, la Fiscal no encontró pruebas suficientes. Este es un problema común en nuestro país, y nos da a conocer el fallo y la impunidad en los procesos.

De acuerdo con lo que nos dice Padgett (2011), uno de los problemas que aqueja a nuestro país es la impunidad, la misma representa una grave violación a los derechos humanos, pues sostiene la continuidad de hechos semejantes a los que no investiga ni sanciona, y profundiza en el daño al dejar sin reparación a las víctimas y a la sociedad. En muchos de los casos también propicia nuevas violaciones a derechos, pues construye riesgos contra quienes exigen justicia.

Según información del Diario La Hora (2013), en América Latina sólo el 10% de los casos llegan a tener sentencia, mientras que, en Ecuador, apenas llega al 3%. Este hecho nos da a conocer que el tratamiento legal del femicidio tiene limitaciones que involucran al sistema de justicia ecuatoriano, a ello hay que añadir que uno de los factores que inciden en el incremento del femicidio son de carácter cultural, como por ejemplo: el patriarcado, el machismo, la misoginia, mismos que sobresalen en la sociedad, además el aumento de la burocratización en los procedimientos legales y de investigación, lo que repercute en la protección de la mujer cuando ha sido violentada.

Por lo tanto, para Saccomano (2017), la impunidad se traduce en la debilidad institucional, además, informes estadísticos de ONU MUJERES consideran que en 2014

los niveles de impunidad en algunos países de América Latina alcanzaron el 98% de los feminicidios denunciados (TeleSur, 2016)

Para Jaramillo (2016), uno de los mecanismos procesales que podrían aportar en reducir la impunidad en este tipo de delitos es el juicio oral, debido a que, según el mismo, constituye un derecho central del debido proceso, además está apegado a un marco de protección general para las garantías del procedimiento. Sin juicio, es difícil concebir la existencia de un proceso penal capaz de respetar los derechos individuales.

Dentro del juicio oral es necesario presentar una prueba, la cual debe ser actuada y valorada en debida forma en el proceso penal. Es de vital importancia reforzar e implementar este tipo de procesos debido a que en los mismos están presentes: el derecho de inmediación, concentración, contradicción; lo que a la vez refuerza la objetividad de los juzgadores al momento de tomar decisiones.

Se puede decir que el femicidio va más allá de un delito y se manifiesta como un delito de odio, el mismo tiene que ver cuando un individuo ataca a otro y lo convierte en víctima, tomando como punto de partida su pertenencia a un determinado grupo social, edad, raza, género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

Con respecto a los crímenes de odio, que tienen que ver con los sentimientos e inclinaciones psicológicas del ser humano, no están inmersas en el ámbito jurídico, no se reconocen. Las ideas y los sentimientos, sin embargo, sí se tratan de manera parcial, el comportamiento humano, el cual puede considerarse como: aceptable, recomendable o reprochable. Es a partir de esta clasificación, en cuanto al comportamiento, que deriva la tipificación de una conducta, ya sea esta culposa o dolosa.

Lo que podemos aportar es que, este tipo de delito ha existido desde el surgimiento de la humanidad, sin embargo, se empieza a reconocerse como “delito” específico a finales del siglo XX, cuando se empieza a tratar el problema de la discriminación como vulneración del derecho y, por lo tanto, el femicidio tiene como carácter intrínseco la discriminación. Sin embargo, cabe recalcar que a través de la historia se ha conocido como delitos “pasionales”, ya que los celos y el ejercicio de poder han sido los móviles para el cometimiento de los mismos.

Considerando estos antecedentes, el femicidio se convierte en un tipo penal más agravado que el homicidio y el asesinato porque, a más de atentar en contra de un bien jurídico que es la vida, se quebrantan otros como: el derecho a la dignidad humana. Debido a que por lo general los cuerpos de las víctimas son expuestos públicamente, a más de ello, su familia se involucra directamente en un círculo de violencia, los hijos comúnmente están presentes durante el cometimiento de este delito.

Es así que el delito de femicidio implica la violación a la dignidad y la igualdad de las mujeres, los elementos normativos de este delito previsto en el Art. 141 del COIP.

3.6. Impacto social y jurídico

El Estado ecuatoriano presenta grandes avances en la protección de los derechos humanos, la Constitución del 2008 integra principios y derechos de manera transversal en el texto constitucional: el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, la igualdad formal, el derecho a la integridad física, psíquica, en el Artículo 66. En lo que respecta al Código Orgánico Integral Penal, tipifica el delito de femicidio en el Artículo 141, sus agravantes en el Artículo 142, buscando garantizar el derecho a la vida de la mujer que ha sido vulnerado, torturado de manera inhumana.

La tipificación de este tipo penal no ha garantizado la reducción del femicidio, lo cual descubrimos en las sentencias emitidas por los operadores de justicia, debido a que carecen de una obligación sustancial que garantice la no repetición del delito en otras víctimas de violencia. Al no existir una reflexión con enfoque de género en las interpretaciones judiciales, permite que se continúe con la vulneración de los derechos de la mujer de manera inhumana, por consecuencia la sociedad exige la protección de los derechos fundamentales de la mujer.

Se verificó, en el estudio de los procesos seleccionados, que las sentencias son llevadas de una manera fría, se resuelven las causas sin aplicar un verdadero enfoque de género, sin una interpretación jurídica internacional que permita vislumbrar el ejercicio de poder que el hombre ejerce sobre la mujer al momento del cometimiento del delito., reflejando, de esta manera, que las sentencias sólo cumplen con el deber de sancionar al procesado, sin observar a fondo el grave problema en el que las mujeres están inmersas por el sistema estructural.

Criterios que concuerdan con Fernández (2017) en la “Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador”, en donde resalta el esfuerzo de la institución judicial para hacer visible el derecho de la mujer al acceso a la justicia, pero llama la atención que los casos de femicidio no tienen una respuesta oportuna, demostrando que apenas un 37% de 182 casos de femicidios en el año 2015 y 2016 han obtenido sentencia condenatoria, existiendo una falta real al acceso a la justicia reparatoria de las víctimas directas e indirectas, debido a que el derecho limita a las mujeres a ser escuchadas por los operadores de justicia.

Es alarmante el impacto negativo que tiene la vida de la mujer en la sociedad, esto se debe a los estereotipos de género que el sistema estructural a impuesto. El Estado debe adoptar medidas para erradicar los patrones socioculturales, a través de programas o



diseños de educación que anulen los prejuicios que invisibilizan a la mujer. Ante esta realidad, la construcción de leyes que sancionen la violencia contra la mujer no contrarrestan los actos de femicidio.

Al ser la sociedad parte de la construcción de normativas que protegen los derechos humanos, ha permitido que esta exija al Estado su cumplimiento y sanción de los delitos cometidos en contra de la mujer, al darse el incumplimiento por el Estado se genera la falta de credibilidad por parte de la sociedad en la justicia.

Capítulo IV

4.1. Conclusiones

Con el fin de emitir las conclusiones al presente trabajo de investigación se mantuvo el hilo conductor de los componentes propuestos en la metodología, con la finalidad de llegar al objetivo planteado: analizar los avances, los límites del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia del cantón Cuenca entre los periodos 2014-2016, identificando los factores que impiden un acceso efectivo a la justicia y el cese de la impunidad. Frente a esta realidad, se presenta las siguientes conclusiones:

Se observa que por parte del Estado ecuatoriano se reestructura la normativa penal, lo que permite identificar avances, que no son suficientes debido a que existe aspectos fundamentales en temas de violencia por trabajar, que rompan los estereotipos, percepciones impuestos por el sistema patriarcal a los hombres (dominio, superioridad, poder, control y agresión), y a las mujeres (cuidado, dependencia, humillación, obediencia y subordinación).

La aplicación de la figura de femicidio, por parte de los jueces y fiscales, en los casos de muertes violentas de mujeres, presentan trabas durante su aplicación, debido a que no se observa el contexto del crimen, las reacciones de poder y esto se traduce en fallos judiciales que en ocasiones concluyen en la impunidad.

Los operados de justicia conocen la existencia de la tipificación del tipo penal femicidio, más no fundamentan sus resoluciones e investigación con este tipo penal femicidio, por considerar al delito de femicidio similar al delito de asesinato.

Lo que manifiesta que en el Ecuador somos testigos indiferentes de diversos actos de violencia cometidos en contra de la mujer, reportándose diariamente agresiones físicas, psicológicas, sexuales, que detonan en hechos de muertes violentas “femicidios”, contexto que se ha convertido en un grave problema social y cultural.

La erradicación de la violencia de género no ha funcionado como se lo planteó desde un inicio, pues los operadores de justicia entrevistados reconocieron que la situación de las mujeres no ha variado, y son las estadísticas las que corroboran aquello. Ya que, más allá de un problema legal, existe una problemática social y cultural; como prueba de ello está el sistema patriarcal, el cual no ha podido ser de-construido en su totalidad.

Esto nos da a pensar que las estrategias por parte del Estado no han partido desde un contexto en específico, sino no que han estado enfocadas sólo en la sanción antes que la prevención.

A esto se suma, que en el análisis de casos judicializados se distinguió la falta de metodología e investigación al momento de fundamentar la aplicación del tipo penal por parte de los operadores de justicia, lo que permitió identificar la existencia de nudos críticos que impiden una adecuada interpretación y sanción del femicidio.

4.2. Recomendaciones

Con base a lo expresado en el acápite de conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones para la mejor aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores de justicia.

Es necesario llevar a cabo un proceso eficaz, acompañado de un enfoque de género que parta del contexto real del cometimiento del crimen, es preciso preguntarnos si la

figura del femicidio ha reducido el cometimiento de muertes de mujeres. Se puede sostener que aún es muy temprano para dar contestación a la misma, por el contrario, desde el sistema de justicia se debe trabajar en la toma de conciencia con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Lo que permite al Estado garantizar una vida libre de violencia, un acceso a la justicia, la falta de responsabilidad de los operadores de justicia que no cumplen con su deber de garantistas de derechos con enfoque de género, a esto se ha sumado las limitaciones lingüísticas que afrontan las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

El femicidio, en nuestra legislación, no está reconocido como delito de odio, misoginia en contra de la mujer, por lo tanto, aún no queda claro cómo el Estado aborda la desigualdad de género como causa principal o detonante del femicidio.

Principio que, de acuerdo a la información obtenida, genera una mala tipificación penal. Se debe trabajar desde una verdadera comprensión y aceptación de la violencia contra la mujer que permita una adecuada interpretación penal con enfoque de género.

El Estado debe trabajar en la concientización y capacitación, con un enfoque de género, dirigido a todos los operadores de justicia, para obtener una correcta aplicación del tipo penal femicidio, lo que permitiría generar una conciencia en la no vulneración de los derechos de las mujeres, que por décadas han sido transgredidos.

Se debe desarrollar estrategias dirigidas a hombres y mujeres que rompan estereotipos de superioridad o discriminación impuestos por la cultura machista en contra de la mujer.

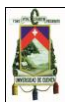


Referencias

- Declaración Universal de los Derechos Humanos*. (10 de Diciembre de 1948). Recuperado el 5 de Abril de 2018, de https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- Proceso de Asesinato, 01283-2016-04849G (1 de Julio de 2016).
- Arroyo, R. (2012). Acceso a la justicia para las mujeres... el laberinto androcéntrico del derecho. *Umbral*, 65-89.
- Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito.
- Asamblea Nacional . (2018). *Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*. Quito.
- Asamblea Nacional. (2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Quito.
- Asquui, A. (2016). *Análisis jurídico de las circunstancias agravantes del femicidio en Ecuador*. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Boira, S., Marcuello-Servós, C., Otero, L., & Sanz, B. V.-C. (2015). Femicidio y feminicidio: Un análisis de las aportaciones en clave iberoamericana. *Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, 27-46.
- Cagigas, A. (2000). El patriarcado, como origen de la violencia doméstica. *Monte Buciero*, (5), 307-318.
- Calderón, G., & Nuñez, M. J. (2013). *¿Qué es el poder para Foucault?* Recuperado el 8 de Enero de 2019, de http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/268/1/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20poder%20seg%C3%BAAn%20Foucault%3F%2007_06_2013_01.pdf
- Camacho, G. (2014). *La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Consejo Nacional para la Igualdad de Género: Quito.
- Campoy, I. (2007). *Igualdad, no discriminación y discapacidad. Una visión integradora de las realidades españolas y argentina*. Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.



- Capaldo, G., Clérico, L., & Sieckmann, J. (2012). El Principio de Igualdad en el Diálogo en el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional . *Internalización del Derecho Constitucional-Constitucionalización del Derecho Internacional* .
- Carcedo, A. (2010). *Femicidio en Ecuador* . Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género .
- CEDAW. (1979). *Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)*. Recuperado el 8 de Mayo de 2019, de <https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw>
- CEDAW. (1992). *Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer*. Recuperado el 9 de Abril de 2019, de <https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>
- Conferencia Mundial de Derechos Humanos . (1993). *Declaración y Programa de Acción de Viena*. Recuperado el 23 de Abril de 2019, de https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
- Consejo Nacional para la Igualdad de Género . (2014). *Logros de la Revolución en Clave de Género*. Recuperado el 24 de Abril de 2019, de <https://www.igualdadgenero.gob.ec/publicaciones/>
- Durán, A. (2012). *Propuesta para la tipificación como delito penal del femicidio en la legislación ecuatoriana*. Quito: Universidad de las Américas.
- Facio, A. (2004). Metodología para el análisis de género de un proyecto de ley. *Otras Miradas*, 1-11.
- Fernández, L. (2017). *La Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador. Análisis de sentencias judiciales de muertes ocurridas en el 2015*. Quito: Artes Gráficas SILVA.
- Heim, D., & Bodelon, E. (2010). Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas. *Derecho, género e igualdad*.
- INEC. (2011). *Violencia de Género en Ecuador*. Recuperado el 20 de Junio de 2019, de http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia.
- INEC, I. N. (2011). *Violencia de Género en Ecuador*. Obtenido de http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia
- Iribarne, M. (2016). Femicidio (en México). *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 205-223.



- Jaramillo, J. (2016). *El femicidio en el Código Orgánico Integral Penal: realidades y perspectivas procesales*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- La Hora. (7 de Marzo de 2013). El femicidio queda en la impunidad. *La hora. Lo que necesita saber*.
- Lagarde, M. (2005). *¿A qué llamamos femicidio?* México: Comisión Especial para Conocer y dar seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
- Lagarde, M. (2006). *Del femicidio al feminicidio*. Universidad de Costa Rica.
- Mannarelli, M. E. (2009). Palabra escrita, autonomía y derechos de las mujeres. *Defensa de los derechos humanos en América Latina: avances y retrocesos*, 183-253.
- Naciones Unidas. (1967). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*. Recuperado el 7 de Mayo de 2019, de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>
- ONU MUJERES. (1995). *Declaración y Plataforma de Acción de Beijin*. Beijin: United Nations.
- ONU MUJERES. (2011). *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*. Panamá: Impresiones Jeicos.
- Organización de los Estados Americanos. (1994). *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer*. Recuperado el 15 de Junio de 2019, de Belém do Pará: https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
- Padgett, H. (2011). Unn femicidio peor que el del norte. Las muertas del Edomex son muchas más que las de Juárez. En L. González, *Feminicidio: alerta urgente de justicia y alto a la impunidad* (págs. 11-25). México: Defensor.
- Pérez, M. (2018). La caracterización del feminicidio de la pareja o expareja y los delitos de odio discriminatorio. *Derecho PUCP*.
- Pinilla, A. M. (2015). *Ciclos de la violencia y emancipación femenina*. Recuperado el 19 de Mayo de 2019, de Construyendo psicología : <http://articulando.com.uy/ciclos-de-violencia-y-emancipacion-femenina/>
- Reyes, G. (2018). ¿Asesinato o feminicidio?: estudios de caso en el departamento de La Paz. *Temas Sociales*.



- Ruiz, F., & Almodóvar, M. (2012). *Familia, género y violencia doméstica: diversas experiencias de investigación social*. Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
- Russell, D. (2008). Femicide: Politicizing the Killing of Females. En W. H. Organization, *Strengthening Understanding of Femicide. Using research to galvanize action and accountability* (págs. 27-32). Washigton DC: Program for Appropriate Technology in Health (PATH).
- Saccomano, C. (2017). El femicidio en América Latina: ¿vacío legal o deficit del Estado de derecho? *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* , 51-78.
- TeleSur. (13 de Abril de 2016). *98% de los feminicidios en América Latina siguen impunes*. Recuperado el 12 de Enero de 2019, de <https://www.telesurtv.net/news/98-por-ciento-de-los-feminicidios-en-America-Latina-sigue-impune-20160413-0053.html>
- Toledo, P. (2012). *La tipificación del femicidio/feminicidio en países latinoamericanos: Antecedentes y primeras sentencias (1999-2012)*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Velasco, E. (2014). *Incidencia del delito de asesinato en la convivencia social en el cantón Quito, aplicado a la legislación ecuatoriana*. Quito : Universidad Central del Ecuador.
- Walker, L. (1979). *El síndrome de la mujer maltratada*. DESCLÉE DE BROUWER.



Anexos

Anexo 1: Consentimiento informado de cada uno de los participantes

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CADA UNO DE LOS ENTREVISTADOS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA.
<p>1. Objetivo de la entrevista</p> <p>Analizar los avances y límites en la aplicación del tipo penal femicidio por parte de los operadores/as de justicia, (Jueces y Fiscales) en el periodo 2014-2016 en el Cantón Cuenca, identificando los factores que impiden a un acceso efectivo a la justicia y el cese de la impunidad</p>
<p>2. Duración de la entrevista</p> <p>La Presente entrevista tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente</p>
<p>3. Aspectos éticos de la entrevista</p> <p>Se mantendrá la “reserva de la información” para lo cual solicito autorización para que se le grabe la misma, la entrevista y los datos constantes en ella serán citados en la tesis, si el profesional a si lo autoriza.</p>
<p>Firma de Consentimiento_____</p>
<p>4. Información general de la persona entrevistada</p> <p>Nombre de persona entrevistada:</p>



Nombre de persona entrevistada:

Nivel educativo:

Cargo que ocupa:

Sexo y género y auto identificación étnica:

Lugar en el cual desempeña sus funciones:

Tiempo que ejerce cargo



Anexo 2: Guía de preguntas para operadores de justicia.

Desarrollo de la entrevista
5.1. ¿Qué son los derechos humanos?
5.2. ¿Considera que los derechos humanos son aplicados a todas las personas por igual?
5.3. ¿Considera que los derechos humanos tienen un enfoque de Género?
5.4. ¿Considera que los derechos de las mujeres son visibles en la sociedad?
5.5. ¿Cuál es su criterio del femicidio?
5.6. ¿Cree usted que el “Femicidio” incorporado en nuestra normativa penal es idóneo para sancionar y erradicar la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujer?
5.7. ¿considera que la “Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres”, vela y protege todos los derechos de las mujeres?



5.8. ¿Su criterio jurídico profesional sobre los diversos hechos de Femicidios presentados en nuestro Cantón Cuenca, entre los periodos 2014-2015, con el objetivo de determinar si la problemática a aumentados o disminuido desde la tipificación del femicidio en el COIP? Por qué cree usted que se da esta situación?